

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL ARRESTO CIUDADANO FRENTE A LA INSEGURIDAD
CIUDADANA”**

Presentado por:

BACHILLER: FLOR IVETT ROMERO PEÑA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Derecho Penal: Nuevas tendencias

PIURA – PERU

2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

"EL ARRESTO CIUDADANO FRENTE A LA INSEGURIDAD
CIUDADANA"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO


Br. Flor Ivett Romero Peña
AUTORA


Dr. Santiago Herrera Navarro
ASESOR

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas
Sub Línea de Investigación: Derecho Penal: nuevas tendencias

PIURA – PERU

2019

DECLARACIÓN JURADA

DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Yo, FLOR IVETT ROMERO PEÑA, identificada con CU/DNI N° 42537839, en la condición de estudiante () egresante () egresado (x) de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, domiciliado en Los Algarrobos mz. G, lote 2 V etapa, Distrito de Piura, Provincia de Piura, y departamento Piura, con número de celular: 990217578 email: florromero_16@hotmail.com

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Art. 32 de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.

Piura, 22 de julio del 2019



DNI-N° 42537839

Artículo 411.- el que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4 inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para Optar Grados Académicos y Títulos Profesionales – RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033 – 2016- SENEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

"EL ARRESTO CIUDADANO FRENTE A LA INSEGURIDAD
CIUDADANA"

TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO:

Dra. Jacqueline Sarmiento Rojas
Presidente

Mag. Luis Hernán Cruz Vilchez
Secretario

Mag. Esthely Rosa Bayona Castro
vocal

PIURA – PERU

2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
055-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: **"EL ARRESTO CIUDADANO FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA"**, presentada por la **Bachiller: ROMERO PEÑA FLOR** con el **asesoramiento** del **DOCTOR: SANTIAGO HERRERA NAVARRO**; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADO ☒ (X)

DESAPROBADO ☐ ()

Con la mención de:

Muy BUENO

- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 22 de julio de 2019

DRA. JACQUELINE SARMIENTO ROJAS
PRESIDENTE

MAG. LUIS HERNÁN CRUZ VILCHEZ
SECRETARIO

MAG. ESTHEL Y ROSA BAYONA CASTRO
VOCAL

DEDICATORIA

Esta investigación se dedica a todas aquellas personas que sufren las consecuencias de la inseguridad ciudadana, siendo en muchos casos testigos presenciales de ilícitos penales, sin embargo no obstante que la ley les faculta proceder al arresto ciudadano de los infractores, no se atreven a ello porque corre el riesgo de ser agredidos e incluso perder hasta la vida.

AGRADECIMIENTO

Un especial agradecimiento a Dios por permitirme encontrarme en este mundo terrenal, a mi familia, a mi hija, así como a los docentes de la Universidad Nacional de Piura, y a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuido en la culminación de mis estudios universitarios, esperando con esta investigación poder obtener el Título de abogada.

ÍNDICE

DEDICATORIA	05
AGRADECIMIENTO	06
ÍNDICE GENERAL	07
GLOSARIO	11
RESUMEN	17
ABSTRACT	18
INTRODUCCIÓN	19

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.- Libertad de tránsito	20
1.1.1.- Definiciones	20
1.1.2.- Control punitivo	22
1.1.3.- Detención	22
1.1.4.- Tipos de detención	23
1.1.4.1.- Detención Policial	23
1.1.4.2.- Detención preliminar por mandato judicial	24
1.1.4.3.- Arresto ciudadano	25
1.1.4.4.- Prisión preventiva	25
1.2.- El Estado como organización	26
1.3.- División de Poderes	28
1.3.1.- Función Legislativa	29

1.3.2.- Función Administrativa	30
1.3.3.- Función de control social	31
1.3.4.- Control social de acción	32
1.3.5.- Función de brindar seguridad	32
1.4.- El serenazgo en la seguridad ciudadana	33
1.5.- Participación ciudadana en la seguridad	34
1.6.- Nociones sobre seguridad social	35
1.7.- Nociones sobre seguridad jurídica	37
1.8.- Violencia y conducta delictiva	38
1.9.- Violencia, criminalidad e inseguridad	41
1.9.1.- Realidad socioeconómica y matriz civilizatoria	41
1.9.2.- Riesgo y exclusión	42
1.9.3.- Desajustes, contextos y funcionalidades	46
1.9.4.- Sociología relacional y desigualdad persistente	51
1.9.5.- Rol de las instituciones	53
1.9.5.1.- Limitación de actos	53
1.9.5.2.- Los dueños del orden simbólico	54
1.9.5.3.- El sosiego comunitario	55
1.9.5.4.- Cultura y comportamiento	55
1.9.5.5- Los discursos	56
1.10- Programas de prevención comunitaria	58
1.11.- Los programas de vigilancia comunitaria	61
1.12.- Seguridad ciudadana en el derecho comparado	66
1.12.1.- En Chile	66
1.12.2.- En Brasil	70

1.12.3.- En Colombia	71
1.12.4.- En Bolivia	78
1.12.5.- En España	81
1.12.6.- En Ecuador	84

CAPITULO II

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1.- Planteamiento del problema	87
2.2.- Formulación del problema	87
2.3.- Justificación e importancia	87
2.4.- Viabilidad	88
2.5.- Objetivos	88
2.5.1. Objetivo General	88
2.5.2 Objetivos específicos	88
2.6.- Hipótesis	89
2.7.- Variables	89
2.7.1.- Variable independiente	89
2.7.2.- Variable dependiente	89
2.7.3.- Conceptualización de las Variables	89
2.7.4.- Operacionalización de las Variables	90
Indicadores	90
2.8.- Metodología de la investigación	90

2.8.1.- Tipo de investigación	90
2.8.2- Técnicas de investigación	91
2.8.3.- Métodos de investigación	91
 CAPITULO III	
 PROBANZA DE HIPÓTESIS	
3.1.-Probanza jurídico doctrinal	93
3.2.- Análisis dogmático	94
3.2.1.- Constitución Política del Perú 1993	94
3.2.2.- Análisis de ley Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	100
3.2.3.- Reglamento Ley Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana	103
3.3.- Análisis del resultado de las encuestas	104
CONCLUSIONES	108
RECOMENDACIONES	109
BIBLIOGRAFÍA	110
APÉNDICES	115

GLOSARIO

ACCIÓN. La acción equivale al ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer.

“Del latín agere, hacer, obrar. La amplitud de esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la vida es acción, y solo existe inacción – corporal al menos- en la muerte y en la nada.

Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste”. (CABANELLAS DE TORRES Guillermo: 2002, pág. 17)

Los modernos procesalistas de mayor relieve internacional definen la acción:” Un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano, para obtener del Estado la composición del litigio”

ACCIÓN PROCESAL. Los modernos procesalistas de mayor relieve internacional definen la acción: ”Un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano, para obtener del Estado la composición del litigio”

La función jurisdiccional no puede desarrollarse sino a instancia de parte. La función jurisdiccional es, ciertamente, una obligación asumida por el Estado, cuando éste prohíbe el ejercicio del propio derecho a los interesados. Frente a esta obligación está el derecho de acción, como derecho a que el juez o Sala, a través de sus miembros, realice la función jurisdiccional” (Diccionario Jurídico Espasa: 2009, pág. 43)

ARRESTO CIUDADANO: Toda persona podrá acceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. En este caso se debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más

cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda en dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privado de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se haga contar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. (Artículo 260 Código Procesal Penal)

CONSTITUCIÓN: Acción o efecto de constituir. Formación o establecimiento de una cosa o un derecho. | Ordenamiento, disposición. | Esta voz pertenece de modo especial al Derecho Político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada Estado.

CONSTITUCIONALIDAD: Calidad de constitucional. Conformidad o compatibilidad de una ley común con respecto a la Constitución del Estado.

CONSTITUCIONALMENTE: Con arreglo a la Constitución.

DEBIDO PROCESO. Proceso adecuado, en donde se hayan respetado todas las garantías legales.

“Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas” (CABANELLAS DE TORRES Guillermo, op.,cit.,pág. 111)

DERECHO: El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia social entre estas y que la resolución de los

conflictos de tipo interpersonal lleguen a buen puerto. Condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente.

DETENCIÓN: la detención es “aquella medida cautelar consistente en la privación de la libertad de una persona, practicada por la Policía previa orden Judicial, o por ella misma o por un particular en el caso de delito Flagrante, con la sola finalidad de poner al imputado a disposición del Fiscal para iniciar o proseguir una investigación”(CCAROCA PÉREZ, Alex.: 2005, pág. 159-160)

JURISDICCIÓN: Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder. | Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. | Poder para gobernar y para aplicar las leyes.

JURISPRUDENCIA: En un sentido amplio se entiende por jurisprudencia a toda decisión emanada de autoridad judicial o gubernativa, independientemente de su rango y categoría, al interpretar y aplicar el Derecho. Así, por ejemplo se habla de **Jurisprudencia** de la Corte Suprema, **Jurisprudencia** de la Corte Superior, **Jurisprudencia** del Tribunal Fiscal, del Tribunal Registral, etc.

JUSTICIA: Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo

LOGÍSTICA: La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas, y componente, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en momento apropiado

NORMA: La regla social o institucional que establece límites y prohibiciones al comportamiento humano.

“Regla de conducta /. Precepto/ Ley/ Criterio o patrón/ Práctica. Regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo., op., cit., pág. 269)

ORDENAMIENTO JURÍDICO: Conjunto de normas que en determinado momento histórico rigen en una comunidad. (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo., op., cit., pág. 269).

PANDILLAJE: Es una agrupación de adolescentes y jóvenes que se enfrentan a problemas comunes y comparten los mismos intereses. Estos grupos demuestran violencia, robo, inseguridad ciudadana. Esta pandilla proviene de hogares en crisis o destruidos, de padres separados y también por falta de comunicación tanto padres e hijos (El Pandillaje: <http://www.monografias.com/trabajos53/pandillaje-peru/pandillaje-peru.shtml>).

PROCESO. Se define al proceso como el conjunto de actos que realiza el órgano jurisdiccional y los intervinientes, debidamente concadenados, y que termina en una sentencia. Es el instrumento esencial de la jurisdicción o función del Estado, que consiste en una serie de actos tendientes a la aplicación o realización del derecho en un caso concreto (Diccionario Jurídico Espasa. op. cit. pág. 1175).

PROCEDIMIENTO: “En general, acción de proceder./ Sistema o método de ejecución, actuación o fabricación. / Modo de proceder en la justicia,

actuación de trámites judiciales o administrativos; es decir, que es el conjunto de actos diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de una causa. (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Op.,cit .pág. 321)

PRUEBA: Es el grado de convicción que se produce en los magistrados sobre la veracidad o falsedad de un hecho, en virtud de los medios de prueba ofrecidos en juicio.

SEGURIDAD CIUDADANA: La seguridad ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndose como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad, y el patrimonio ciudadano.

SEGURIDAD JURÍDICA. La estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o transgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Derecho. Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro. (Diccionario Jurídico Espasa. Op. Cit, pág. 1302).

SENTENCIA: Dictamen, opinión, parecer propio. | Máxima, aforismo, dicho moral o filosófico. | Decisión extrajudicial de la persona a quien se encomienda resolver una controversia, duda o dificultad. | Resolución judicial en una causa. | Fallo en la cuestión principal de un proceso.

SERENAZGO: En la lengua general, el sustantivo sereno y el adjetivo sereno son de diferente origen latino. Como sustantivo, es en España el vigilante nocturno que hace rondas para garantizar la seguridad de los vecinos y también la humedad de la noche; como adjetivo, sereno equivale a tranquilo, sosegado. Pero en el Perú y en Bolivia, el sustantivo sereno ha extendido su significado hasta designar al vigilante diurno o nocturno encargado de cooperar con los vecinos y ponerlos en relación con la policía en caso necesario. Su función se conoce, en estos países, como serenazgo.

TEORÍA: Conocimiento meramente especulativo sobre una rama del saber o a cerca de una actividad./ Conjunto de leyes o principios que determinan un orden de efectos o fenómenos./ posición doctrinal para explicar un problema jurídico o defender alguna solución del mismo” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Op. Cit., pág. 380)

TITULAR: Quién ostenta una cosa, una facultad o potestad. Según Cabanellas, quién goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor. Según Flores Polo, quién ejerce un cargo o función por derecho propio, basado en un nombramiento; lo opuesto en suplente o reemplazante.

VÍCTIMA: Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. Quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su persona y perjuicio en sus intereses. Quien se expone a un grave riesgo por otro.(CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Op. Cit., pág. 408)

RESUMEN

Esta investigación “El arresto ciudadano frente a la inseguridad ciudadana” tiene por finalidad demostrar que la figura jurídica del arresto ciudadano en el Perú, deviene en innecesaria, por el alto índice delincencial en el país, que trae como consecuencia que la inseguridad existente en el país se siga incrementando; y las personas no se atreven al arresto de los delincuentes porque corren el riesgo de perder hasta su propia vida; para lo cual se propone como objetivo general: Determinar las causas por las cuales el arresto ciudadano no contribuye a combatir la delincuencia; y como objetivos específicos se proponen: - Analizar las razones por las cuales los ciudadanos no se atreven a capturar a delincuentes en flagrancia; así como - Analizar los alcances de arresto ciudadano en nuestra normatividad. La investigación es de carácter descriptivo, correlacional, y documental. Los métodos utilizados son el método dogmático con la finalidad de poder conocer la naturaleza jurídica, del arresto domiciliario y la seguridad ciudadana; el método deductivo, es decir de lo general a lo específico; partiendo de enunciado general del que se va desentrañando partes o elementos específicos; el método explicativo; el método sociológico funcional; el método literal; así como el método empírico mediante una encuesta. Con los que nos permite probar nuestra hipótesis y en consecuencia arribar a las conclusiones y recomendaciones propuestas.

Palabras claves: Arresto ciudadano, indecisión.

ABSTRACT

This research "Citizen's arrest in the face of citizen insecurity" aims to demonstrate that the legal figure of citizen arrest in Peru, becomes unnecessary, due to the high delinquency rate in the country, which results in the insecurity in the country. country continues to increase; and people do not dare to arrest criminals because they run the risk of losing even their own lives; for which it is proposed as a general objective: To determine the causes for which citizen arrest does not contribute to combat crime; and specific objectives are proposed: - Analyze the reasons why citizens do not dare to catch criminals in flagrancy; as well as - Analyze the scope of citizen arrest in our regulations. The research is descriptive, correlational, and documentary. The methods used are the dogmatic method in order to know the legal nature of the house arrest and citizen security; the deductive method, that is, from the general to the specific; starting from the general statement from which specific parts or elements are unraveled; the explanatory method; the functional sociological method; the literal method; as well as the empirical one through a survey. With which we can test our hypothesis and consequently reach the conclusions and recommendations proposed.

Key words: Citizen arrest, indecision.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación “El arresto ciudadano frente a la inseguridad ciudadana” persigue tocar un tema de actualidad por la zozobra en que vive la población por el incremento de la delincuencia, no funcionando el sistema de seguridad ciudadana; de allí que las personas no se atreven a detener a delincuentes en flagrancia por que corren el riesgo de perder su vida a enfrentárseles, en consecuencia el artículo 260 del Código Procesal Penal deviene en inaplicable.

Esta investigación consta de tres partes; abordándose en una primera parte el marco teórico que comprende: La libertad de tránsito, sus definiciones, el control punitivo, la detención, los tipos de detención, la detención policial, la detención preliminar por mandato judicial, el arresto ciudadano, la prisión preventiva, el Estado como organización, la participación ciudadana en la seguridad, la seguridad ciudadana en el derecho comparado; etc.

En una segunda parte se aborda lo relacionado al diseño metodológico que comprende, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación de la investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables, la conceptualización de las variables, la operacionalización de las variables, los métodos de investigación que se utilizan en la investigación.

En una tercera parte se aborda lo referente a la probanza de la hipótesis que comprende: Una probanza jurídico doctrinal; un análisis dogmático del contenido en la constitución sobre el tema; así como un análisis de ley Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento; y un análisis de la discusión de los resultados de las encuestas; lo que nos permite arribar a las conclusiones y recomendaciones que nos proponemos en la presente investigación.

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.- LIBERTAD DE TRÁNSITO

1.1.1.- Definiciones

El derecho de la libertad de tránsito, es el derecho que tiene toda persona para transitar y desplazarse libremente por todo el territorio nacional, sin obstáculo alguno.

La libertad de tránsito es el derecho que cuenta con reconocimiento Constitucional Nacional e internacional. Tanto su contenido, características y limites, se encuentra en la constitución y en los tratados sobre Derechos Humanos. De igual manera el Tribunal Constitucional ha identificado a través de su jurisprudencia los actos lesivos a este derecho, siendo uno de los casos más frecuentes la instalación de rejas metálicas en las vías públicas.

El derecho a la libertad de tránsito se encuentra reconocido en el artículo 2º inciso 11 de la Constitución vigente que prescribe que *Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia a transitar por el territorio Nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por sanidad o por mandato judicial o por la aplicación de la Ley de extranjería*

De otro lado el Tribunal Constitucional ha señalado que libertad de tránsito implica que toda persona “Puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta que en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer como o por donde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o transito dentro del

mismo o simplemente salida o egreso del país”(S.T.C. N° 3482-2005-PHC. Fundamentos Jurídicos 5)

El Tribunal Constitucional también ha señalado que el derecho a la libertad de tránsito se manifiesta a través del uso de vías de naturaleza pública (como son los parques calles avenidas, carreteras etc.), vías privadas de uso público (Por ejemplo uso de servidumbre de paso) o espacios privados. En una de sus decisiones, habiendo señalado que “no se puede descartar que se vulnere dentro de un espacio privado, el derecho fundamental a la libertad de tránsito, en aquellos supuestos, por ejemplo en que no obstante que un espacio sea de dominio privado, una persona que es miembro de una asociación o cualquier persona que tiene una propiedad dentro de ella, se ve impedido de ingresar o salir de él arbitrariamente, por decisión de una persona o de un grupo de ellas”(STC N° 6322-2005-PHC. Fundamento jurídico 12).

RUBIO CORREA, señala que el derecho a la libertad de tránsito no es un derecho absoluto si no que en su ejercicio se deben respetar otros derechos fundamentales o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Al respecto, la Constitución Política señala que la libertad de tránsito puede limitarse por razones de sanidad, mandato judicial y por aplicación de la Ley de extranjería. Por razones de Sanidad se refieren al peligro de ingreso de enfermedades del exterior o por restricciones debido a epidemia de ocasión. Por mandato Judicial implica que el Juez podrá restringir este derecho en ejercicio de sus competencias dentro de un proceso regular. Por aplicación de la Ley de extranjería se relaciona con el supuesto de expulsión de los extranjeros que incumplan las normas de ingreso o permanencia del país.(RUBIO CORREA, Marcial: 1999, pág. 297)

1.1.2.- CONTROL PUNITIVO

Corresponde al Estado como nación, asumir totalmente el control punitivo-lusPuniendi, siendo que para cumplir con esa finalidad, se sirve de instrumentos de control social jurídico-penal, como lo son en Derecho Penal material y Derecho Procesal Penal.

El tratadista MUÑOZ CONDE señala que hablar de Derecho Penal, es hablar de un modo u otro de violencia. Violentos son generalmente los casos de los que se ocupa el Derecho Penal (robo, asesinato, violación, rebelión). Violenta es también la forma en que el Derecho Penal soluciona estos casos (cárcel, inhabilitaciones de derechos) (MUÑOZ CONDE, Francisco: 1993,pág. 25)

1.1.3.- DETENCIÓN:

Se puede definir a la detención como una medida coercitiva por la cual se priva la libertad de una persona, determinada por una autoridad competente o particular en estado de flagrante delito.

CCAROCA PÉREZ, señala que la detención es “aquella medida cautelar consistente en la privación de la libertad de una persona, practicada por la Policía previa orden Judicial, o por ella misma o por un particular en el caso de delito Flagrante, con la sola finalidad de poner al imputado a disposición del Fiscal para iniciar o proseguir una investigación”(CCAROCA PÉREZ, Alex: 2005,pág. 159-160)

DAYENOFF, señala que es el Juez que intervenga en la causa, quien deberá decidir la suerte de la libertad ambulatoria del imputado de acuerdo a la calificación que dé al ilícito denunciado y constante en el acta que acompañará al detenido (DAYENOFF, David Elbio: 1998,pág. 46)

Por su parte MORAS MOM, señala que cuando la detención se produce por orden judicial representa una situación más grave y de mayor permanencia que se da cuando el Juez resuelve indagar y ordena la captura del sospechoso de participe en el delito, para que se lo haga comparecer a su presencia, o también cuando es sometido a proceso se convierte en rebelde por sustracción del proceso (Huida, incomparecencia, etc.). (MORAS MOM, Jorge R.: 2004, pág. 257)

1.1.4.- TIPOS DE DETENCIÓN

El Código Procesal Penal señala

Según el Código Procesal señala los siguientes tipos de detención.

1.1.4.1.- Detención Policial.-

La detención policial es la privación de la libertad de una persona por parte de la Policía durante un lapso de tiempo determinado por la Ley (24 horas o al término de la instancia para delitos comunes y hasta 15 días para delitos exceptuados).

GIMENO SENDRA señala que: “Es una medida cautelar ejecutada en función de la incoación de un proceso penal cuya finalidad es la de garantizar la futura aplicación del Iuspuniendi y, de modo inmediato, la de proporcionar al Juez el primer sustrato fáctico para el inicio de la instrucción formal y la adopción, en su caso de las medidas preventivas que correspondan”, la detención Policial es, en consecuencia instrumental respecto a la detención Policial. Urtells Ramos, siguiendo a De Luca y Foschini, acota el respecto que “...precisamente por tener esa característica de instrumentalidad en segundo

grado, está considerado como una medida precautelar”(Citado por FRANCO ALZAMORA, Carlos. Sub Oficial Técnico de Segunda)

El Artículo 259 del Código Procesal Penal prescribe que:“La Policía Nacional de Perú detiene, sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito.

Existe flagrancia cuando:

1.- El agente es descubierto en la realización del hecho punible

2.- El agente acaba de ocultar el hecho punible y es descubierto

3.- El agente a huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audio visual, dispositivos o equipos con cuya tecnológica se haya registrado su imagen y se haya encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.

4.- El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de perpetrado el delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

1.1.4.2.- Detención preliminar por mandato judicial

El artículo 261 del Código Procesal Penal prescribe:

1.- El Juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará mandato de prisión preliminar cuando:

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito

sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga, u obstaculización de la averiguación de la verdad.

- b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención
- c) El detenido se fugue de un centro de detención preliminar

1.1.4.3.- Arresto ciudadano

Toda persona podrá acceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.

AL respecto el inciso 2 del artículo 260 del Código Procesal Penal prescribe que: En este caso se debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privado de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega policial. La policía redactará un acta donde se haga contar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

1.1.4.4.- Prisión preventiva

Es dictada por el Juez a solicitud del Ministerio Público en los casos siguientes:

Cuando existen suficientes y graves elementos que demuestren la comisión de un delito y vinculación del acusado en calidad de autor o participe.

Cuando la sanción que se va a imponer es superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

Cuando los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso permitan tener razones suficientes para pensar que el acusado tratará de fugar – peligro de fuga- u obstaculizar la averiguación de la verdad de los hechos – peligro de obstaculización.

Cuando existan elementos suficientes para pensar que el imputado pueda permanecer en prisión preventiva: a) por regla general este tipo de prisión no durará más de nueve meses; b) en casos de procesos complejos la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses; c) la prisión preventiva podrá ampliarse por un plazo adicional de dieciocho meses cuando existan circunstancias que demuestren: i) una especial dificultad o prolongación de la investigación y ii) que el acusado puede sustraerse a la acción de la justicia. El fiscal deberá pedir esta ampliación antes de que el plazo original (general o especial) haya vencido; y d) en caso de que el acusado ya haya sido condenado y haya apelado la condena imputada, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta.

1.2.- EL ESTADO COMO ORGANIZACIÓN

El Estado ha sido definido como comunidad organizada o asentamiento humano establecido en determinado territorio bajo el poder de un gobierno. En una perspectiva diferente se le explica, en cambio, como el complejo de órganos que gobiernan, bajo la autoridad del Derecho, a una comunidad humana políticamente organizada. A partir de sus elementos estructurales o formativos aquella forma de organización social que dentro de cierto territorio y en situación soberana ordenan la vida común de quienes

unidos mediante el vínculo de la ciudadanía conforma su conjunto unitario que es el pueblo.

LASTRA, señala que: El Estado es la personificación del orden jurídico, en cuanto este fundamenta como el único centro ideal y no empírico, de imputación de todas las obligaciones y facultades, por lo que este no es el derecho positivo, si no la personificación, la unidad lógica de todo derecho (LASTRA LASTRA, José Manuel: 1994,Pág. 155)

FRANCISCO PÉREZ, señala que “el Estado como ente cultural tiene por objeto la obtención de un fin, ya que todo producto de la cultura se caracteriza por llevar dentro de si una finalidad, aquello para lo cual es creado por el hombre. Siendo el Estado una institución humana, tiene naturalmente un fin; y, los hombres que componen el estado, los gobernantes y gobernados, al agruparse forman la sociedad estatal, persigue un fin. El estado encierra en su actividad una intensión que es determinante y el motor de toda la estructura.... En fin será el que determina las atribuciones, la competencia material de los diferentes órganos del Estado, y en función de esa competencia crearon órganos. En este fin esta función última del estado y sus diferencia específica con otras sociedades” (PÉREZ, Francisco: 1999, pág. 198)

Por su parte CARL SCHITT, proponía la siguiente definición. “El estado es el estatus político de un pueblo organizado en el interior de una frontera territorial” (SCHMITT, Carl: 1991, pág. 41)

Por otro lado MANUEL MARÍA, define al estado como “El sustrato social estructurado en forma de corporación, cuya actividad se realiza en interés de la colectividad que lo integra”(DIEZ Manuel María, pág. 9)

De otro lado, JELLINEX conceptúa al estado como “la corporación formada por un pueblo, dotado de un poder de mando originario, y asentada en un determinado territorio; o para aplicar un término muy en uso, la corporación territorial dotada de un poder de mando originario” (JELLINEK, Georg: 2001, págs. 109-110).

ZITELLMAN citado por JELLINEK, indica que es “la tierra sobre la que se levanta la comunidad Estado, considerada desde su aspecto jurídico, significa espacio en que el poder del estado puede desenvolver su actividad específica, el poder público, en ese sentido jurídico, la tierra se denomina territorio” (Ibídem. Pág. 137). En cuanto a la población del estado, los hombres que pertenecen en un Estado forman en su totalidad la población y por último el tercer elemento el poder del estado que viene a ser “La voluntad que ha de evidenciar lo fines comunes de la asociación que ha de ordenar y ha de dirigir la ejecución de sus ordenaciones, es precisamente el poder de la asociación distinta a las de sus ordenaciones”. Que no es otra cosa que las aspiraciones del estado para que tiendan a buscar condiciones para que ese grupo o la población a quien representa se le materialice la paz y la felicidad; no existe otro fin, lejos está la concepción de aquellos estados que son utilizados para el clientelaje, el usufructo, esos estados son las dictaduras que mal lo utilizan y no son legítimas ni representativas de la población.

1.3.- DIVISIÓN DE PODERES

La división de los poderes es una institución política proyectada en la historia, pues desde Aristóteles hasta Montesquiu, inclusive todos a quienes les

preocupó la división de poderes dedujeron sus principios de acuerdo a una realidad histórica.

Pero no se trata de que la división de poderes sea rígida y no permite que un poder intervenga en el otro, si no que cada uno en su competencia y facultades logre la coordinación de sus funciones para lograr el fin del Estado; es decir “No es separación de poderes estatales, si no una unidad de poderes en el estado, diferenciación y especialización de funciones, pero al mismo tiempo coordinación de funciones, asegurada por la unidad de oficio estatal supremo”(SERRA ROJAS, Andrés: 2000)

La constitución Política del Perú, señala que las funciones del estado se dividen en:

1.3.1.- Función Legislativa

La función legislativa consiste en la elaboración del derecho objetivo a través del Congreso que representa al Poder Legislativo; o diremos, es elaborar leyes por los congresistas que conforman el parlamento que son elegidos democráticamente.

Dentro de las características de la función legislativa que tiene el Estado

- Es otorgado por el congreso vía una Ley autoritativa.
- La Ley precisa materia y plazo.
- Es una figura que contiene un carácter excepcional.
- Siendo una vía excepcional la delegación de otorgarse a solicitud expresa del ejecutivo y no de forma voluntaria y espontanea por parte del Legislativo.

- Es una institución que debe entrar en funcionamiento cuando así lo requieran las circunstancias, ya que su propia naturaleza jurídica rechaza el uso abusivo de esta delegación.
- Un decreto legislativo no es fuente para otros decretos legislativos. Promulgado un decreto Legislativo el Ejecutivo no puede ni siquiera derogarlo, porque desde el momento de su promulgación y publicación, es el parlamento el que reasume su competencia para mantenerlo, modificarlo o derogarlo.
- Es elemento consustancial a la delegación de facultades la dación de cuenta. A través de ella, el Ejecutivo queda obligado a un prudente de la delegación que ha recibido y a su vez, el parlamento retiene la facultad de evaluar y controlar el cumplimiento de la delegación que ha concedido, demandando la responsabilidad política del Ejecutivo por cualquier abuso o exceso. La posición aquí expuesta es favorable a la delegación de facultades legislativas.(BERNALES BALLESTEROS, Enrique: 1999, pág. 502).

1.3.2.- Función Administrativa

El concepto de función administrativa es esencialmente dinámico e históricamente variable, puesto que incluye a las actividades de la administración pública destinadas a cumplir con metas e intereses colectivos, finalidades que pueden obtenerse de manera muy diversa, siendo la contratación administrativa reglada una de ellas (GUTIÉRREZ, Walter; 2005,pág. 993).

De otro lado SERRA ROJAS, señala que: “La función administrativa es la que normalmente le corresponde al poder ejecutivo, se realiza bajo el orden Jurídico concreto o particular y a los actos materiales, que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o realización de las demás actividades que corresponden en su relación con otros entes públicos o con los particulares, regladas por el interés general y bajo el régimen de Policía o control”(SERRA ROJAS, Andrés. Ob. Cit pág. 67).

Para Ignacio Burgoa, “El poder administrativo implica la función pública conocida como los actos de autoridad concretos, particulares e individualizados que no requieren de controversias jurídicas por resolver para que valga su existencia” (BURGOA ORIHUELA, Ignacio: 1979,pág. 67

1.3.3.- Función de control social

La imposición de una sanción se lleva a cabo primariamente a nivel social. El control social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias, los que actúan automáticamente y el ciudadano los aprende inconscientemente (MUÑOZ CONDE Francisco: 2001).

El concepto de control social se comprende los recursos de que dispone una sociedad determinada para asegurarse de la conformidad comportamiento de sus miembros a un conjunto de reglas y principios establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad responde a sus transgresores.(BERCALLI Roberto, BUSTOS RAMIREZ Juan y MIRALLES 1983. Pág. 15).

1.3.4.- Control social de Acción

Los mecanismos sociales dirigidos a obtener la aceptación del sistema de valores del orden social son múltiples y variados , teniendo como objetivo común que el individuo internalice esos valores hasta el punto de aceptarlos como propios y que en sus relaciones sociales se comporte conforme a dichos valores, ya que internalizando estos valores genera en el individuo controles internos, los mismos que condicionaran su comportamiento conforme a la norma social, esto es, comportamiento que se corresponden con los que precisamente se esperan de Él (BERCALLI Roberto, BUSTOS RAMIREZ Juan y MIRALLES 1983. *Pág. 15*).

En el proceso de construcción de la conformidad tienen especial importancia los llamados mecanismos sociales, siendo que estos parten del reconocimiento de autodeterminación del individuo y del hecho que esta capacidad pueda llevarlo a la no aceptación del sistema social, pudiendo ocurrir, de esta forma que el individuo viviera, en contradicción con el mundo social. Así mismo los mecanismos de socialización tienen por objeto inducir en el individuo las significaciones del mundo social, siendo por ejemplo, en el sistema educacional, en los espectáculos deportivos, en los parques de diversiones y en los canales de información que, mediante filtros ocultan lo relevante y dejan pasar lo irrelevante, impidiendo que el individuo pueda informarse de lo que realmente interesa.(BUSTOS RAMIREZ, Juan “*Obras Completas*”. 2004, *pág. 491*).

1.3.5.- Función de brindar seguridad

La palabra “seguridad” deriva del latín *Seguritas*, atis, que significa “cualidad de seguro” o “Certeza” así como “Cualidad de ordenamiento

Jurídico” que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente la previsibilidad de su aplicación. (*Diccionario de la Lengua Española*: 2001, pág. 2040).

La seguridad fue originalmente concebida como la protección del Derecho hacia la persona frente a las arbitrariedades del poder público. Así pertenecen a la Declaración Francesa en lo que respecta a seguridad, los tres principios básicos del Derecho Penal moderno: no hay delito sin Ley, no hay pena sin Ley y no hay pena sin juicio. Este es un concepto nuclear, esencial pero correspondiente a los primeros tiempos de la seguridad Jurídica expresa de los derechos.

El concepto de seguridad humana existente en la Declaración de los Derechos Humanos en donde se señala en su artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su personas”. Así mismo señala en su artículo 22º que toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad(Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

1.4.- EI SERENAZGO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA:

El sustantivo sereno y el adjetivo sereno son de diferente origen latino. Como sustantivo, es en España el vigilante nocturno que hace rondas para garantizar la seguridad de los vecinos y también la humedad de la noche; como adjetivo, sereno equivale a tranquilo, sosegado. Pero en el Perú y en Bolivia, el

sustantivo sereno ha extendido su significado hasta designar al vigilante diurno o nocturno encargado de cooperar con los vecinos y ponerlos en relación con la policía en caso necesario. Su función se conoce, en estos países, como serenazgo (HILDEBRANDT PÉREZ; Martha Luz. Febrero del 2011).

El artículo 85 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las municipalidades brindan servicio de Seguridad Ciudadana así como tienen como función “Establecer un sistema de seguridad ciudadana con la participación de la sociedad civil y la PNP y normar el establecimiento y funcionamiento de los servicios de serenazgo”

La Gerencia de Serenazgo, tiene como función principal promover acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones públicas y privadas, a fin de preservar el orden y la seguridad, mejorando la calidad de vida de los vecinos, así como apoyar a la PNP en acciones contra la delincuencia común y asistir a la ciudadanía en caso de desastres. Con el objetivo de Promover acciones de seguridad a fin de prevenir la comisión de delitos y faltas, promover mecanismos eficaces de participación ciudadana en las acciones de prevención de seguridad, educando, concientizando y organizando a la población y realizar acciones coordinadas y conjuntas con las comisarías en la prevención de hechos delictivos.

1.5.- PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SEGURIDAD:

La Seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el estado con la participación de la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y contribuir a la prevención de que se cometan delitos y faltas. Esto es pues producto de la llamada “huida del

derecho penal”, fundada en los temores de la comunidad resumidos en la doctrina de la seguridad ciudadana que ha hecho de la lucha contra el delito su bandera y justificación.

Hay que tener en cuenta que la Ley otorga participación a la ciudadanía, esta participación es limitada por cuanto que la ley solo le da a la ciudadanía, la función de colaborar. Lo cierto que la ciudadanía juega un papel importante en prevención, lucha y control de la delincuencia común, lo cual puede apreciarse, por ejemplo en el funcionamiento de las CORESEC, COPROSEC y CODISEC tal como lo establece la Ley 27933 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.

La seguridad ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndose como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se entiende por seguridad ciudadana a “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”

1.6.- NOCIONES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

Como noción de política pública el primero en utilizar fue el primero Simón Bolívar, no obstante es conocido que el término de “Seguridad Social” aparece con un sentido técnico para mediados de la década de los treinta del siglo XX en sendas leyes de Nueva Zelanda y Estados Unidos de América (REYES VALDEZ, Félix María y otros: 2007, Pág. 14-15)

- a) La seguridad Social, como mecanismo de protección es el conjunto de políticas estructuradas por un estado, así tenemos que OUVINA Guillermo, señala que "Si solo se refiere a situaciones límites para la seguridad considerada de tal manera para el poder político- como podrían ser en la actualidad el terrorismo o el narcotráfico en algunas sociedades, hipótesis que por algunos han sido denominados como derecho excepcional o si, en cambio ella es más amplia y abarca a toda la problemática que ese poder político estima requiere de sanciones penales para poder ser debidamente encauzados" (OUVINA, Guillermo y otros: 1998,pág. 621)
- b) La seguridad Social, como rama del derecho, es la parte que tiene como objeto el estudio y formulación del conjunto de normas destinadas a regular de la política social de un estado.
- c) La seguridad social, como administración: es el conjunto de instituciones administrativas que tiene por objeto la regulación y gestión de los programas protectores establecidos de conformidad con el ordenamiento jurídico y de las políticas establecidas en este propósito.

Ricardo Núñez, señala que dentro de las características del derecho penal, es que este es el finalista al perseguir la tranquilidad y seguridad social mediante la protección de los individuos y de la sociedad (Núñez Ricardo C.: 1999, pág. 16)

FRERRAJOLI, señala que si el fin es únicamente la máxima seguridad social alcanzable contra la repetición de futuros delitos servirá para legitimar de un modo apriorístico los máximos medios, las penas más severas, incluida la pena de muerte, los procedimientos más anti garantistas, incluida la tortura y

las medidas de policía más autoritarias e invasivas(FRERRAJOLI, Luigi: 1995,pág. 261).

PIQUET, señala que la seguridad social brinda la garantía plena de que la comunidad en su totalidad no vea que ningún inocente se vea atrapado por el poder punitivo (PIQUET, Alejandro: 2005,pág. 99).

1.7.- NOCIONES SOBRE SEGURIDAD JURÍDICA:

BURGOA, señala que La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si esta debe afectarlos deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la constitución políticas y las leyes secundarias (BURGOA, Ignacio: 2002, págs. 504-505).

AZUELA GUITRON, señala que la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados será eficaz, la existencia de esta seguridad no solo implica un deber para la autoridades del estado; si bien estas deben abstenerse de vulnerar de los derechos de los gobernados, estos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes es decir, que pueden ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social. (AZUELA GUITRON, Mariano: 2005,pág. 11)

CASTILLO ALVA, señala que la seguridad jurídica presta una función de garantías a los ciudadanos pues permite, si no eliminar, sí restringe el ámbito de la discrecionalidad del Poder Judicial, en el momento de una emisión de una

sentencia condenatoria. Logra que el ciudadano sepa a que atenerse, ya sea cuando comete un hecho como cuando lo omite, y sepa además la naturaleza (Pena o medidas de seguridad), Clase (pena privativa de libertad pena restrictiva de derecho o días multa). (CASTILLO ALVA, José Luis y otros: 2004, pág. 47).

1.8.- VIOLENCIA Y CONDUCTA DELICTIVA

En las ciencias sociales existen dos teorías básicas para el estudio de la violencia y de la conducta delictiva, que se presentan en diversas combinaciones: la teoría de las formas de socialización y la teoría de la ruptura o de la anomia. En el primer caso, el énfasis se coloca en la socialización, es decir la violencia comprendería dimensiones organizativas, institucionales y culturales que pueden conducir a la selección de estrategias violentas por parte de ciertos actores sociales. En esa línea, la teoría de Sutherland afirma que las causas primarias del delito se derivarían de la existencia de grupos “subculturales” de delincuentes (grupo de amigos, familia, cárcel), que traspasan los conocimientos delictuales (ILPES 1997).

En el segundo caso, privilegiando como factores explicativos las dimensiones estructurales y sociales, la violencia surgiría de la ruptura o desajuste del orden social, es decir, de cambios sociales acelerados como efecto de la industrialización o la urbanización, por ejemplo, que disuelven los mecanismos tradicionales de control social y generan una brecha entre aspiraciones y los medios sociales y culturalmente aceptados para hacer realidad esas aspiraciones (Martínez 1990). En esa línea, la teoría de Maltón sostiene que la conducta delictiva depende de la capacidad de los individuos

para alcanzar las metas-éxitos de acuerdo a su entorno social y a la importancia asignada al éxito económico (ILPES 1997). Por tanto, desde esta perspectiva, existiría una correlación importante entre pobreza y delincuencia.

Desde un punto de vista subjetivo e intangible la seguridad ciudadana se define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana (ILPES 1998: 5). Desde otra perspectiva, se plantea que la seguridad ciudadana tiene como principal significado el no temer una agresión violenta, saber respetar la integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión. La seguridad sería una creación cultural que implique una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente compartido por todos (PNUD 1998: 128).

En un nivel más limitado, la seguridad pública ha sido definida como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de la policía administrativa (González, S. y otros 1994).

La violencia afecta la capacidad gubernamental para enfrentarla. El incremento de hechos de violencia obliga a destinar, al combate de ésta, recursos que podrían dirigirse a tareas de desarrollo y contribuye además a la corrupción. Asimismo, la población comienza a recurrir a sistemas privados de seguridad al percibir que el Estado es ineficaz en esta función, con lo que éste

va perdiendo legitimidad y relevancia. Finalmente, existe consenso en reconocer los efectos negativos de la violencia en el crecimiento y en la reducción de la pobreza en la Región (Ayres 1998).

En suma, si bien el cálculo de costos socioeconómicos es, en muchos casos, parcial por ausencia de información de base que lo sustente adecuadamente, destaca el impacto económico de las diversas formas de violencia para efectos de políticas y programas encaminados a reducirla.

La Violencia doméstica e intrafamiliar; Se estima que en algún momento de sus vidas más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 33% fue víctima de abusos sexuales entre las edades de 16 y 49 años, mientras que el 45% recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales (UN 1999).

Se distinguen tres tipos de violencia intrafamiliar: física, psicológica y sexual. Algunos estudios incluyen también la violencia indirecta, como aquella en la cual se prohíbe al cónyuge estudiar, trabajar, se le aísla o encierra en el hogar y se le restringe la libertad.

Otro fenómeno de violencia intrafamiliar, cuya visibilidad y frecuencia también ha aumentado, es la violencia contra los niños. Se sostiene que los adolescentes, víctimas de la violencia infantil, tienen el riesgo más alto de convertirse en perturbadores de violencia. En Brasil los niños abandonados son, a la vez, las principales víctimas y las principales fuentes de violencia urbana (McAlister 1998). Una estimación señala que existen 6 millones de menores en la Región que son objeto de maltrato y que 80 mil mueren cada año como resultado de los daños causados por sus padres, familiares u otros (Ayres 1998). Un estudio realizado en 1996 por UNICEF, reveló que en ese

país de mil agresiones sexuales en contra de menores denunciadas en Sao Paulo a SOS Niño, más de un 75% eran cometidas por parientes en el siguiente orden: padre legítimo, hermano, padrastro y tío; y el 8% de las víctimas sufrió ese tipo de violencia antes de completar 3 años. (Arriagada, Irma y Lorena Godoy; 1999)

1.9.- VIOLENCIA, CRIMINALIDAD E INSEGURIDAD

1.9.1.- Realidad socioeconómica y matriz civilizatoria

Las miradas economicistas pueden agruparse en dos grandes líneas. En la primera, se halla la concepción del “sistema- mundo”, para la cual el capitalismo y la desigualdad se reproducen a escala mundial generando necesariamente “violencia estructural”.

Las tendencias actuales nos llevan a la mundialización y a la globalización (como proceso secular de avance del sistema capitalista), a la asimetría entre el centro y la periferia, a la vulnerabilidad de los países subdesarrollados, a la fragilidad de los estados, a la exacerbación de los nacionalismos sub estatales y a la explosión de violencia, pobreza y desigualdad.

Dentro de esta corriente, aunque incorporando el alcance más propiamente social de la idea de estructura, Galtung arriesga una definición no exenta de polémicas: *la violencia con una clara relación sujeto-objeto es manifiesta por cuanto es visible como acción. Esto se corresponde con nuestras ideas acerca de qué es el drama; y esa violencia es personal, habida cuenta de que hay personas que cometen la violencia...La violencia que no tiene esta relación es estructural, está impresa en la estructura. Así, cuando un*

marido golpea a su mujer tenemos ante nosotros un caso claro de violencia personal; pero si un millón de maridos mantienen a un millón de mujeres en la ignorancia nos las habemos con una violencia estructural. Igualmente, en una sociedad en la que la esperanza de vida de las clases superiores duplica la de las inferiores, la violencia está siendo ejercida aunque no haya actores concretos a los que se pueda señalar como atacantes de otras personas, como sucede cuando una persona mata a otra (Galtung, 1996).

La segunda línea de análisis prioriza el academicismo propio de las metodologías econométricas. Aquí el modelo de desarrollo es un conjunto de variables socioeconómicas (pobreza, distribución del ingreso, desempleo, logro educativo, etc.) que oficia como posible “determinante” de la violencia y la criminalidad. Las causas de la violencia, su impacto absoluto sobre las tasas de criminalidad, los principales grupos afectados y las implicaciones en términos de las políticas de prevención, son algunos de los aspectos más transitados para que las variables socioeconómicas –previa modelización técnica– congelen la dimensión espacio-temporal.

Casi todos estos enfoques reconocen que la violencia y la criminalidad no son datos inexplicables, ni expresiones de comportamientos aleatorios e irracionales. También casi todos ellos se aferran al siguiente lugar común: los comportamientos violentos y criminales están inducidos por incentivos económicos y racionales, al mismo tiempo que están limitados por restricciones institucionales.

1.9.2.- Riesgo y exclusión

El sicologismo estructural tiene a la teoría de los “factores de riesgo” como su vertiente principal. Basada en los recursos que proporciona la aproximación epidemiológica (Londoño y Guerrero, 1999), esta teoría reconoce que la violencia y la criminalidad están atadas a múltiples causas. En vista de la naturaleza del fenómeno de la violencia, es pertinente adoptar un enfoque multicausal, el cual no busca establecer la “causa” del mismo, sino identificar los factores que lo producen o que se asocian con mayor frecuencia. Aquí la causalidad se interpreta como “probabilidad”, de modo tal que cuantos más factores de riesgo se presenten simultáneamente, mayor será la posibilidad de que se produzcan manifestaciones de violencia y criminalidad.

Los factores de riesgo se clasifican habitualmente en tres grandes conjuntos: a) factores relacionados con las posiciones y situaciones familiares y sociales de las personas, tales como la edad, el sexo, la educación, la socialización, el consumo de alcohol y drogas; b) factores sociales, económicos y culturales: desempleo, pobreza, hacinamiento, desigualdad social, violencia en los medios de comunicación, cultura de la violencia; c) factores contextuales e institucionales, como la guerra, el tráfico de drogas, la corrupción, la disponibilidad de armas de fuego (Arriagada y Godoy, 1999)

Entre los factores relacionados con la posición y la situación familiar y social de los sujetos, el sexo y la edad son categorías individuales revelantes, ya que hay una incidencia mucho mayor tanto de víctimas como de agresores entre los hombres jóvenes, con formas de violencia específica contra las mujeres.

El nivel socioeconómico y la situación laboral también son variables explicativas de gran importancia entre los factores socioeconómicos, dado que

a la tensión adicional que causa la incertidumbre propia de quienes viven en situación de pobreza, se suman las precarias condiciones económicas, el hacinamiento y el desempleo que atentan contra la integración social y generan marginalidad.

Esta mirada sociológica permite incluso que la explicación llegue a los núcleos normativos y a la idea de subculturas marginales”, *las nuevas modalidades de crecimiento producen un debilitamiento de los vínculos de los trabajadores menos calificados con el mercado laboral y un progresivo aislamiento con respecto a los circuitos sociales y económicos de la ciudad. La combinación de ambas situaciones crea condiciones que reducen la adhesión a los marcos normativos generales, favoreciendo procesos de desintegración familiar, la emergencia de comportamientos de riesgo y de formas innovadoras, y a menudo no legales, de procurar las metas socialmente sancionadas. Por otro lado, la progresiva concentración de los pobres en áreas que, por esa misma razón, registran una alta densidad de precariedades, alimenta la formación de subculturas marginales. Como resultado, se transforman los registros de socialización de sus residentes en una dirección que potencia comportamientos disruptores del orden social (Retamoso, et. al., 2003).*

Pero el diagnóstico reconoce otras zonas de interés. El cambio civilizatorio obedece a la creciente racionalización de la vida social, básicamente al ritmo de la revolución científico tecnológica.

La mercantilización de las relaciones sociales y la extensión de la economía de mercado se complementan culturalmente con un talante postmoderno que hace de la sociedad de los medios de comunicación la vía

regia para dar forma a la ética de los deseos y las preferencias, así como para la satisfacción compulsiva de necesidades pretendidamente inmediatas.

Muchos autores aseguran que el crimen florece allí donde reina un acentuado desequilibrio entre las oportunidades y las aspiraciones. El choque entre pretensiones, predilecciones y posibilidades genera un cortocircuito cultural con imprevisibles consecuencias en la conformación de la personalidad social. ¿Qué ocurre cuando la acción delictiva se muestra como un camino adecuado y funcional para cumplir semejante mandato cultural? ¿Qué decir cuando no sólo las más flagrantes “desigualdades” sociales llevan a la violencia, sino que también la búsqueda de “diferencias” es un poderoso generador de subculturas de violencia?

En los últimos años se ha tomado conciencia de que los efectos devastadores de la violencia se procesan además en el ámbito privado o doméstico. Los seres humanos tenemos una alta probabilidad de ser torturados física y mentalmente en la esfera privada del hogar, a manos de alguien supuestamente querido (Rojas Marcos, 1995). Esta realidad desafía todas las interpretaciones corrientes y replantea la significación de lo propiamente *social*:

Según estudios recientes, estos comportamientos crueles están estadísticamente relacionados con conocidos factores sociales y económicos que tienden a aumentar el nivel de estrés y de tensión en el hogar: la pobreza, el desempleo, los conflictos en la pareja, el abuso de drogas o de alcohol, los embarazos indeseados y las enfermedades físicas y emocionales crónicas de los pequeños. Sin embargo, no cabe admitir una relación causa-efecto entre estos factores sociales y los malos tratos, pues una amplia mayoría de padres afligidos por estos problemas tratan a sus hijos pequeños con bondad,

consideración y amor, incluso en tiempos de crisis (Rojas Marcos, 1995). Con sus distintos énfasis, todos los elementos reseñados nos remiten a los núcleos centrales de la teoría sociológica. Con ellos llegaremos a ciertos aspectos que se han hecho dogma dentro de la literatura sociológica sobre la violencia y la criminalidad, y a otros menos frecuentes pero igualmente importantes para el mapa interpretativo del fenómeno.

1.9.3.- Desajustes, contextos y funcionalidades

Hay quienes aseguran que nuestras sociedades viven procesos de “inseguridad estructural”. Estos se vinculan con las actuales instancias de cambios, y singularizan la etapa presente –marcada por el riesgo y la incertidumbre- de globalización y postmodernidad. En nuestros países periféricos, estos riesgos e incertidumbres se multiplican además por el deterioro sistemático de las posibilidades de movilidad social y por la desestructuración de las redes de bienestar y seguridad sociales. En la línea de definición de una teoría de la determinación estructural del temor ciudadano, se halla el desfase entre las expectativas y las posibilidades reales de realización, desfase que se vuelve estructural a través del reparto desigual de los riesgos (Domínguez, 2006).

Entre la ocurrencia de delitos y la percepción social sobre la delincuencia median mecanismos complejos que deben ser explicados a nivel estructural. Y uno de ellos casi siempre está asociado a la incertidumbre en general y a los problemas de la sociedad del riesgo: *el riesgo reside en la percepción de amenaza para el futuro. Son, en este sentido, riesgos que allí donde hacen acto de aparición causan destrucciones de una medida tal que*

*actuar después de ellos se vuelve prácticamente imposible, y que por lo tanto poseen y despliegan una relevancia para la actuación ya como conjeturas, como amenazas para el futuro, como prognosis preventivas. El centro de la conciencia del riesgo no reside en el presente, sino en el futuro (Beck, citado en Domínguez, 2006).*⁵

El esquema interpretativo de la inseguridad estructural se apoya en tres vectores. El primero de ellos se denomina “aspiraciones de realización personal”, cuya síntesis es la siguiente:

Existen valores con arreglo a los cuales los sujetos desean vivir, o bien, incorporando una dimensión proyectiva de la acción en cuanto dotada de sentido, valores que estos sujetos esperan alcanzar o mantener, por lo que es menester agregar la idea de metas a la de los valores. Estos valores englobarían también hábitos y aspiraciones cotidianas, ya de niveles de consumo y niveles de vida, ya de cultivo personal. Y, por supuesto, existen mínimas necesidades que de no ser satisfechas comprometen la misma existencia del sujeto como realidad psicofísica. De aquí en más resumiremos todos estos elementos bajo el rótulo de aspiraciones de realización personal, que serán en definitiva las que guíen el accionar de los sujetos (Domínguez, 2006).

El segundo de los vectores no es menos tradicional conceptualmente: *existen además riesgos reales o al menos percibidos y evaluados como tales que amenazan la consecución o preservación de estas aspiraciones, y como contrapartida más tradicional en la acumulación sociológica, existen también medios subjetivamente evaluados como tales a los efectos de alcanzar o*

satisfacer estos fines, hábitos y valores. Resumiremos este componente como chances de realización personal (Domínguez, 2006).

Por fin, el tercer vector se apoya en la existencia de sistemas sociales a partir de los cuales se procesan las definiciones, percepciones y aspiraciones:

Proponemos además que existen (sub)sistemas e instituciones sociales que brindan seguridad, proveyendo de medios y controlando riesgos...Asimismo, la sola retracción de un sistema proveedor de seguridad implica la (re)aparición de riesgos. Sintetizando, llamaremos a este componente entropía del entorno social, en cuanto representa energía, oportunidades y peligros para el sujeto fruto de un juego de fuerzas más amplio que él mismo y de difícil aprehensión (Domínguez, 2006).

Los contextos de socialización.-

El primer contexto estructural lo constituye la familia. Cuando un joven comete un delito, los ojos escrutadores apuntan a su familia, buscando allí las razones últimas. Familias desestructuradas, madres solteras o abandonadas, o algún tipo de conflictividad interna, son imágenes recurrentes en los medios de comunicación y en la literatura especializada para entender las causas profundas del delito. Sea lo que fuere, parece verificarse una dinámica que disminuye los controles y la eficacia de los procesos de socialización e internalización de normas.

La escasa participación en la organización cotidiana es un indicador de pérdida de la interdependencia en el hogar; entendida como la necesidad de coordinación y complementariedad para la realización de objetivos comunes. Con todas las diferencias evidentes entre una familia y la sociedad, sucede algo comparable a aquello que, en un nivel macrosocial, Castel considera como

‘supernumerarios’: una población excluida estructuralmente del mercado de trabajo, superflua para la división social del trabajo. En nuestro caso, son jóvenes sin roles definidos en la división familiar de las tareas, sin un lugar muy claro en la reproducción de dicha estructura (Kessler, 2004)

El segundo contexto de socialización relevante es el de las trayectorias escolares. A lo largo del tiempo, se han ido acumulando hipótesis sobre el fracaso escolar, la deserción temprana y la delincuencia juvenil. Pero las mismas han sido cuestionadas y relativizadas en su capacidad explicativa. Hoy se reconoce que la institución escolar no tiene incidencia en la génesis de conductas delictivas, aunque su accionar favorece o contrarresta tendencias que se gestan por fuera de ella: *de manera semejante a la pérdida de lazos familiares, la deserción escolar erosionaría el entramado vincular de los jóvenes, debilitando su integración e interdependencia, y reduciría las oportunidades de empleabilidad futura así como las posibilidades de construcción de un proyecto personal (Kessler, 2004).*

El último contexto de socialización echa raíces en la vida barrial o comunitaria. En tal sentido, el delito podría ser una consecuencia del resquebrajamiento de la trama comunitaria local.

Las funcionalidades del delito.-

El delito es un fenómeno normal a pesar de ser odiado. Despierta sentimientos de rechazo, pero no puede ser erradicado de la vida social. Esta conocida afirmación durkheimiana se relaciona con esta otra: la criminalidad tiene alguna razón de utilidad. En la célebre discusión sobre lo normal y lo patológico, Durkheim alerta sobre la necesidad de renunciar a la costumbre extendida de juzgar una institución, una práctica o una máxima moral, como si

fueran buenas o malas en sí mismas y por sí mismas para todos los tipos sociales indistintamente.

El delito...consiste en un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos, dotados de una Energía y de una nitidez particulares. Para que en una sociedad dada los actos calificados de criminales pudiesen dejar de ser cometidos, haría falta que los sentimientos que ellos hieren se encontrasen en todas las conciencias individuales sin excepción y con el grado y fuerza necesarios para contener los sentimientos contrarios (Durkheim, 2004).

Los argumentos funcionalistas –cristalizados emblemáticamente en las investigaciones de Merton - siguen teniendo importancia para la comprensión de la violencia y la criminalidad.

La violencia y el delito satisfacen necesidades, activan mecanismos de identidad, refuerzan estrategias de pertenencia, estimulan la producción de prestigio y consolidan relaciones de poder y dominación. A nivel micro, se transforman en engranajes para la redistribución del ingreso; a nivel macro, estructuran empresas económicas de gran porte capaces de sostener diversas actividades legales.

Pero hay más: la violencia, la criminalidad y la inseguridad mantienen involuntariamente sistemas de creencias, concepciones morales, cosmovisiones tipificadoras, delimitaciones entre el bien y el mal, garantizando así la legitimidad de universos simbólicos de alta complejidad. En la misma dirección, se alimentan las rutinas discursivas de los medios de comunicación, para los cuales la violencia y la criminalidad no son sólo una referencia semiótica sino además unos bienes con altísima rentabilidad económica.

En sus funcionalidades más clásicas, el delito sustenta –nada más ni nada menos- que mundos institucionales como el sistema de justicia, las policías y las cárceles. Estos se autonomizan, y empujan sobre el sistema político y los gobiernos para asegurarse su supervivencia ampliada. También permite el delito el despliegue de saberes técnicos de distinta índole, del mismo modo que el desarrollo de la seguridad privada y personal, como actividad económica de gran magnitud.

No se exagera si se afirma que la violencia, la criminalidad y la inseguridad amparan una parte sustancial del orden social. Se trata de un entramado invisible –por lo tanto, estructural- de consecuencias no intencionales que coloniza el corazón de la reproducción sistémica.

1.9.4.- Sociología relacional y desigualdad persistente

¿Cuánto incide la desigualdad social en la generación de violencia y criminalidad? Sobre este aspecto, mucho se ha postulado y poco se ha especificado. Si asumimos a la desigualdad como un conjunto de categorías limitadas, que establecen límites organizacionales y definen el alcance de las diferencias sociales, advertiremos de inmediato la aparición de una amplísima línea de trabajo. Las desigualdades sociales entre las personas obedecen principalmente a diferencias categoriales como hombre/mujer, blanco/negro, ciudadano/extranjero, musulmán/judío, rico/pobre, etc., más que a diferencias individuales de atributos, inclinaciones o desempeños.

¿Por qué la violencia doméstica se canaliza prioritariamente hacia las mujeres? ¿Por qué en la gran mayoría de las poblaciones de personas privadas de libertad hay sobre representación de pobres y negros? ¿Por qué es

habitual la criminalización de las conductas de los extranjeros? La determinación exacta de estos cruces sólo puede dilucidarse en el ámbito estructural, es decir, en el proceso de institucionalización de los pares categoriales. Las causas, los usos y los efectos de la desigualdad se hallan inscriptas en las organizaciones:

Causas y consecuencias

Las estructuras de la reproducción de la desigualdad –esas que ignoran sistemáticamente ciertas teorías del comportamiento- reconocen cuatro mecanismos causales. El primero de ellos, la *explotación*, se activa cuando personas con poder disponen de los recursos de los que extraen utilidades incrementadas. El *acaparamiento de oportunidades* es el segundo mecanismo, y se da cuando los miembros de una red categorialmente circunscripta obtienen el acceso a un recurso que es valioso, renovable y sujeto a monopolio. El tercer mecanismo, conocido como la *emulación*, consiste en la copia de modelos organizacionales establecidos y el trasplante de relaciones sociales existentes de un ámbito a otro. Por último, la *adaptación* es la elaboración de rutinas como la ayuda mutua, la influencia política, el cortejo y la recolección de información sobre la base de estructuras categorialmente desiguales. Según Charles Tilly, la explotación y el acaparamiento de oportunidades favorecen la instalación de la desigualdad categorial, en tanto la emulación y la adaptación generalizan su influencia (Tilly, 2000).

El delito es interpretado, en la mayoría de los casos, como el resultado de la evolución de la pobreza, la marginalidad y la desigualdad en la distribución de ingresos o riquezas. Dada cierta situación estructural, es

esperable cierta respuesta comportamental. Las desigualdades abstractas presuponen también la distribución diferencial de diversos capitales individuales, reduciendo así la acción social a mero determinismo.

1.9.5.- Rol de las instituciones

Toda institución es, en rigor, un lugar de construcción de desigualdades categoriales. Las organizaciones que ejercen un poder de coacción –como el Estado- asumen el predominio hacia fuera y hacia adentro para controlar grandes concentraciones de recursos utilizables dentro de las poblaciones. Una institución consiste en el establecimiento de límites explícitamente categoriales que ayudan a resolver problemas de organización (solidaridad, lealtad, control, sanción, monopolio, etc.). Una categoría es un conjunto de actores que comparte un límite que lo distingue de otro conjunto de actores excluidos por ese límite. Una categoría aglutina actores juzgados semejantes, escinde conjunto de actores considerados desemejantes y define relaciones entre ambos (Tilly, 2000).

1.9.5.1.- Limitación de actos

A través de la policía, los estados cumplen con la función de limitar los actos y comportamientos que configuran un perjuicio para las personas. La naturaleza de servicio público de protección, obliga a las instituciones a desenvolverse en un marco de respeto de los derechos ciudadanos –lo que no siempre ocurre- y de apoyo a las normas regulatorias. En ese Estado de derecho, la acción institucional está regida en todo momento por el principio de

legalidad. La labor institucional de las policías puede sintetizarse de la siguiente manera:

Si la protección ciudadana frente a ilícitos y delitos determina el eje funcional básico de la policía, la prevención y represión de dichos actos configura sus misiones centrales...Por su parte, se ha añadido a la policía el desempeño de diversas labores comunitarias relacionadas particularmente con el mantenimiento del orden y las libertades públicas, la aplicación de las leyes no penales y el control de la circulación vehicular, entre otras tareas (Sain, 2002).

1.9.5.2.- Los dueños del orden simbólico

Además de las instituciones de control formal, la acción de los medios masivos de comunicación se revela esencial en los procesos de producción de sentido sobre la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Existe un espacio de la opinión pública, gobernado por leyes propias y hegemonizado por las iniciativas privadas, en donde la violencia y la criminalidad devienen en productos noticiosos de alta cotización, los cuales modifican las coordenadas de realidad y resignifican las demandas sobre el sistema político.

Los medios de comunicación ocupan un lugar difícil en el análisis de la violencia y la criminalidad. Muchos afirman su influencia condicionante sobre las percepciones colectivas. Otros argumentan que la emisión de contenidos violentos produce violencia real. En cualquier caso, todas las hipótesis están sujetas a discusión y demandan esfuerzos de investigación sobre un campo heterogéneo y complejo.

1.9.5.3.- El sosiego comunitario

Quizá la idea de “pánico moral” sea excesiva. Mientras que la población suele ser particularmente sensible a los aumentos súbitos del protagonismo delictivo -hechos de relevancia excluyente-, y las sociedades contemporáneas quedan atravesadas por la inseguridad, hay autores que distinguen analíticamente entre *miedo concreto* y *miedo difuso*: el miedo difuso al crimen *resulta de la percepción según la cual los ciudadanos consideran que el delito constituye para ellos una amenaza general y lejana, un fenómeno inquietante por representar un peligro social con posibles repercusiones sobre sus propias vidas. En cambio, la noción de miedo concreto es mucho más precisa: se trata del temor, fundado o no, de ser personalmente víctima de determinados actos violentos”* (Rico y Salas, 1988).²⁸

1.9.5.4.- Cultura y comportamiento:

La cultura y el comportamiento, demuestra que la dimensión normativa no puede dissociarse de la cultural. Forma parte de ella, y sólo puede desagregarse por razones analíticas. Los abordajes culturales y subculturales son recurrentes en la literatura sobre violencia y criminalidad. Para muchos incluso, las propias normas sociales integrarían la amplia definición de cultura que incluye valores, creencias, gustos y deseos. Aquí figuran, por ejemplo, los pioneros estudios de la Escuela de Chicago que ponen el acento en la adquisición de los individuos de un “sistema de valores” que favorece la acción delictiva. Los conceptos medulares giran en torno al “principio de aprendizaje”, que supone que el comportamiento delictivo se aprende, y el “principio de asociación diferencial”, que afirma que dicho aprendizaje se hace con los otros,

vale decir, que las personas se vuelven delincuentes por la frecuentación de pares con tales orientaciones (Kessler, 2004).

1.9.5.5- Los discursos

Desde el punto de vista de la comprensión colectiva, las acciones y los sujetos de la violencia, criminalidad y la inseguridad son residuos discursivamente por los distintos engranajes institucionales, estos discursos vienen en estructuras de conocimiento que incluyen secuencias de acción estereotipada

En términos generales es posible distinguir tres (03) tipos de estrategias institucionales de despersonalización: la eventualización, la existencialización y la naturalización.

Las instituciones y la vida social adquieren contorno a través de lo prescripto y lo simbólico. Por esa razón, antes de lanzarse a su reconstrucción analítica, es menester observarlas como “guiones estructurados”. Todas las instituciones se basan en unos fundamentos ideales que conforman su organización, objetivos y legitimaciones. Esos “modos de ficción” operan como una suerte de “encantamiento del mundo”.

Una de las vertientes más tradicionales en materia de violencia, criminalidad e inseguridad, consiste en los estudios de los “discursos políticos” que definen el nivel más general sobre el asunto. Como hemos señalado en el segundo escalón, los medios de comunicación despliegan sus ofensivas narrativas, incorporando no sólo los discursos políticos, sino además las manifestaciones ciudadanas a través de testimonios, denuncias o cualquier otra clase de opiniones manipuladas.

La violencia, la criminalidad y la inseguridad son tematizadas significativamente desde la política, los medios de comunicación, las instituciones, las organizaciones sociales, la vida cotidiana y el sentido común. El mapa del discurso muestra varios territorios, con sus zonas de consenso y sus zonas de conflicto. La conciencia simbólicamente estructurada tiene una serie de representantes –expertos, profesionales, voceros- que se entregan a una incesante lucha simbólica para imponer una definición última de la realidad. Las verdades sobre la violencia y la criminalidad son apenas discursos –simples o rebuscados- que pugnan por un lugar legítimo dentro del orden (o desorden) social.

El razonamiento estructural queda atado a la idea de “conciencia moral” de la sociedad, y a partir de allí Durkheim arriba a la conclusión que el delito es necesario y, por lo tanto, útil para la evolución normal de la moral y del derecho. Bajo este foco, el delincuente ya no es un parásito, un cuerpo extraño e inadmisibles, sino un agente regulador de la vida social.

¿Cómo explicar, pues el delito? El propio Durkheim reconoce que la explicación de un fenómeno no se agota cada vez que se revela para qué sirve y el papel que desempeña. La clásica tensión entre lo causal y lo funcional queda de manifiesto en la siguiente afirmación: *cuando se va a explicar un fenómeno social, es preciso investigar separadamente la causa eficiente que lo produce y la función que viene a llenar...Por ejemplo, la reacción social que constituye la pena es debida a la intensidad de los sentimientos colectivos que ofende el delito; pero por otra parte, ella tiene por función útil el mantener esos sentimientos en el mismo grado de intensidad, porque no tardarían en enervarse si los delitos que ellos sufren no fueran castigados (Durkheim, 2004).*

En sus funcionalidades más clásicas, el delito sustenta –nada más ni nada menos- que mundos institucionales como el sistema de justicia, las policías y las cárceles. Estos se autonomizan, y empujan sobre el sistema político y los gobiernos para asegurarse su supervivencia ampliada. También permite el delito el despliegue de saberes técnicos de distinta.

En términos generales, es posible distinguir tres tipos de estrategias institucionales de despersonalización: la eventualización, la existencialización y la naturalización:

En la eventualización la acción o reacción es presentada como un evento, como algo que ocurre sin participación de los sujetos. En la existencialización la acción o reacción es presentada como algo que simplemente existe. En la naturalización, la acción o reacción es presentada como un proceso natural y, por tanto, inevitable (Vasilachis de Gialdino, 1997).

Las conductas de la violencia y la criminalidad pueden tamizarse por intermedio del discurso de los propios protagonistas. De esa forma, los contextos de socialización y desigualdad afloran como referencias culturales cargadas de sentido.

1.10-PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA

Los objetivos de los programas de prevención comunitaria en esta época son también, por tanto, menos ambiciosos, no se trata tanto de acabar con los bolsillos de pobreza, sino de garantizar que los mismos están diseñados arquitectónicamente de tal forma que se garantiza la vigilancia natural de los mismos por parte de los residentes y, por otra parte, se pretende enlistar la participación de los vecinos en programas de vigilancia comunitaria.

Los primeros modelos de prevención comunitaria de la delincuencia generalizada se hacen como referencias en una serie de políticas que se desarrollaron en Estados Unidos y el Reino Unido. Que estaban reorganizados especialmente orientados a fortalecer la capacidad organizativa de los barrios y poner a disposición de comunidades con problemas una serie de recursos sociales que sirvieran para combatir los mismos. Los cuales respondían a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos incluso si ello implicaba ambiciosas inversiones sociales.

Según Shaw y McKay pensaban que las condiciones socioeconómicas de estos barrios (áreas de Chicago) influían negativamente en la capacidad de los residentes para desarrollar una vida asociativa capaz de canalizar a los jóvenes hacia motivaciones convencionales, limitaban la capacidad de los residentes para desarrollar de forma efectiva el control social informal de las actividades de los jóvenes y facilitaban la exposición de los jóvenes a valores, modelos y comportamientos desviados.

El Proyecto de las Áreas de Chicago estaba basado en una visión optimista de la naturaleza humana que concebía como posible la prevención de la delincuencia y la rehabilitación de los delincuentes. Si los hombres delinquen como respuesta a las condiciones sociales en las que viven, la alteración de estas condiciones puede servir para frenar la delincuencia; los contenidos del Proyecto eran diversos, algo consustancial al grado de autonomía que se reconocía a cada una de las áreas, sin embargo en general incluían al menos tres niveles diferentes de actuación:

Programas recreativos para niños en el barrio, incluyendo campamentos de verano, la participación de voluntarios de la comunidad en la organización

de actividades, o la búsqueda de espacios en el barrio para organizar actividades recreativas.

Campañas para facilitar la mejora de la comunidad en dimensiones tal y como los servicios educativos, la seguridad vial, la conservación física, la recogida de basuras, etc.

Actividades dirigidas a los jóvenes delincuentes, así como a adultos que volvían a la comunidad tras haber cumplido condena. En esta categoría se incluían programas de supervisión de los jóvenes delincuentes, la identificación de voluntarios que actuaban como enlace entre la policía, los juzgados de menores y la comunidad y que avocaban por estrategias judiciales de diversión, voluntarios ligados con las pandillas de delincuentes, así como asistencia a los delincuentes que han cumplido condena para reinsertarse en la comunidad(Kobrin, Solomon. 1959.p. 322)

Estas actividades estaban orientadas a la consecución de tres objetivos fundamentales:

(a) facilitar contactos significativos entre adultos y jóvenes en la comunidad.

(b) exponer los residentes locales a las nuevas perspectivas científicas en educación y desarrollo infantil y juvenil

(c) crear canales de comunicación entre los residentes locales y representantes de instituciones públicas y privadas capaces de proporcionar recursos de utilidad para los barrios

El desempleo crece de forma preocupante y asociado al mismo el desarrollo de epidemias de drogas como la heroína con un costo social y humano elevado para las economías urbanas.

En este periodo se produce también en los Estados Unidos la aceleración de lo que se denomina como el “vuelo blanco”, el abandono de las ciudades por parte de las clases medias de raza blanca que se desplazan a los suburbios más seguros con la consecuencia de que la base fiscal de los ayuntamientos de las ciudades más grandes se veía reducido en un momento en el que las necesidades sociales también eran más elevadas.

1.11.- LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA

Estos programas están ligados al modelo policial comunitario. Una de las tácticas que nacen de las colaboraciones en policías y vecinos de comunidades residenciales en el establecimiento de programas comunitarios.

La seguridad en las calles es un objetivo que no puede ser alcanzado solamente por la policía si no que depende del nivel de control social informal que resulta del uso e interacción que tiene un lugar en la calle “Las calles con gente son seguras las calle desiertas son calles inseguras”, una calle segura debe reunir los siguientes requisitos fundamentales:

- Hay que tener una clara demarcación entre lo que es espacio público y privado
- Debe haber ojos centrados en la calle, ojos que pertenecen a los que no pueden llamar propietarios de la calle.
- La acera debe estar en uso continuo y estable para añadir el número de ojos y para inducir a la gente en los edificios de esa calle a mantener un ojo en la calle.

. Los programas defendibles

“El espacio defendible es un modelo para ambientes residenciales que inhibe el delito por medio de la creación de la expresión física de una comunidad social que se defiende así misma” (Newman, 1972: p.3.). El objetivo del espacio defendible es “crear un ambiente en el que el sentimiento de territorialidad latente y de comunidad de los residentes puede traducirse en su responsabilidad para garantizar un espacio habitable seguro, productivo y bien mantenido” (Newman, 1972: p. 3). En la medida en que los delincuentes perciban estos sentimientos y las prácticas resultantes de los mismos serán disuadidos de cometer delitos en dichas áreas. El principio esencial, por tanto, consiste en la reestructuración del espacio urbano para permitir a los residentes el controlar las áreas alrededor de sus viviendas (Newman, 1996).

La ciudad desordenada (desde los 90 hasta la actualidad)

Estos procesos, por medio de los cuales, por un lado, se produce una tendencia de recuperación de las ciudades por parte de las clases medias (gentrificación) y, por otra, los centros urbanos experimentan una regeneración ligada al desarrollo de la economía del entretenimiento y el consumo de bienes culturales (Hobbs et al., 2003).

Este es el contexto en el que se suceden iniciativas para restaurar el “orden público” o en los términos de la teoría de los cristales rotos, mejorar la calidad de vida, y en el de los políticos laboristas ingleses combatir ‘la conducta antisocial’. En el ámbito británico la llegada del gobierno laborista al poder en 1997 también abre un discurso público sensible a las consecuencias de la exclusión social y una serie de programas políticos orientados a combatir este

fenómeno, aunque de forma paradójica también se apoyan políticas penales que contradicen estos desarrollos.

El uso de la video vigilancia como mecanismo de prevención comunitaria también encuentra su nicho en este periodo, así como el desarrollo de colaboraciones preventivas por parte del sector privado(MEDINA ARIZA Juanjo, pág. 27).

Policía de “de calidad de vida”, mantenimiento del orden y “tolerancia cero”

Este enfoque se deriva de lo que algunos traducen como la teoría de los cristales rotos y otros como la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982; Kelling y Coles, 1996). Esta teoría postula que signos de desorden social, tal y como la presencia de prostitutas, drogadictos, jóvenes haciendo gamberradas, mendigos, vendedores ilegales, etc., o signos de desorden físico, tal y como basura, edificios, terrenos o vehículos abandonados, pintadas y graffiti, objeto banalizados, etc, en determinados nichos ecológicos crean una sensación de abandono estatal y social en estas zonas que envía el mensaje de que todo está permitido en las mismas y Nadie se preocupa de hacer nada al respecto. Este clima de sentimientos fomenta entre los residentes sentimientos de inseguridad ciudadana que los lleva a un menor grado de participación social y comunitaria y a evitar la calle.

En base a esta teoría se implanto en Nueva York por William Bratton, jefe de la policía a principios de los 90, el cual se tuvo como resultados la reducción de la delincuencia en un porcentaje respetable que causo discrepancia y críticas positivas y negativas sobre los resultados obtenidos.

De acuerdo con esta teoría una sociedad que tolera el desorden social (ofensas “contra la calidad de vida”) tal y como la prostitución, la mendicidad “agresiva”, o el consumo de drogas o alcohol en la calle envía el mensaje a los potenciales delincuentes de que nadie toma responsabilidades por lo que pasa en la calle, nadie está vigilando, y de que se van a salir con la suya. La policía de “calidad de vida” o la policía basada en la teoría de los cristales rotos proponen, por tanto, la persecución agresiva de actos de desorden social, incluso si estos actos tan solo constituyen, desde el punto de vista legal, infracciones administrativas o delictivas de tipo menor.

Sin embargo aparecieron críticos a los resultados positivos de esta teoría, según Skogan en su libro *Disorder and Decline* (El desorden y decadencia 1990) concluyo que no existe una relación causal entre desorden y delincuencia. En su opinión, si los métodos de Bratton tuvieron un impacto no fue por su énfasis en el mantenimiento del orden, sino por el elevado grado de vigilancia implícito en estas estrategias.

Así como Taylor (2001), aunque no evalúa los efectos de intervenciones policiales, también ha concluido tras la realización de estudios longitudinales examinando la tesis de los cristales rotos que el desorden no conduce necesariamente a aumentos de la delincuencia. Y hay críticos que sugieren que incluso si este tipo de estrategias es eficaz a corto plazo, tiene una serie de consecuencias negativas que se manifiestan a medio y largo plazo. Goldstein advierte que si las estrategias policiales agresivas generan hostilidad en la comunidad llegará un momento en el que la policía tendrá que tratar con las consecuencias de dicha hostilidad citado por Eck y Maguire.

Si bien es cierto existen críticas negativas al respecto es menester recalcar que también existen autores que avalan esta teoría por el funcionamiento eficaz y eficiente de los resultados cuando está en ejecución tal es el caso de Belina y Helms (2003) sugieren que la popularidad de este modelo entre algunos sectores políticos y comerciales puede ser mejor entendida si pensamos sobre la policía de tolerancia cero no solamente como una medida de prevención del delito, sino como una herramienta en la competición económica y turística interurbana. Belina y Helms plantean que, sobre todo para viejas ciudades industriales, es fundamental ofrecer una imagen de seguridad y limpieza como parte de su capacidad competitiva y de promoción de imagen.

El auge de la teoría de los cristales rotos, así, sirvió para generar apoyo a una serie de medidas legales orientadas a restringir el uso de espacios públicos y a limitar la libertad de movimiento y actuación de todos aquellos cuya presencia pudiera generar 'alarma social' por medio de su criminalización (Beckett y Herbert, 2008)

La video vigilancia es conceptualizada por Clarke como una herramienta de prevención situacional que sirve para incrementar el nivel de vigilancia formal y, por tanto, tiene un papel disuasorio al aumentar la percepción subjetiva de los delincuentes de que pueden ser identificados y detenidos. La video vigilancia, se plantea, puede aumentar la probabilidad de identificación y detención, puede aumentar el nivel de seguridad ciudadana y, en ese sentido, fomentar el uso de los espacios video-vigilados, puede actuar como un recordatorio al ciudadano de que es preciso tomar precauciones adicionales frente al delito, y puede ser empleado por la policía y el personal de

seguridad privado a aquellos espacios donde su intervención es requerida (Welsh y Farrington, 2003). En este sentido, la video-vigilancia en teoría sirve para extender la visión de la policía y del personal de seguridad privado.

Welsh y Farrington (2002) procedieron a realizar una meta-análisis de los 18 estudios que ofrecían suficiente información como para realizar este tipo de análisis estadísticos. Los resultados del meta-análisis sugerían que la video-vigilancia servía para reducir la delincuencia, pero que el nivel de reducción de la delincuencia era muy bajo, aproximadamente del 4%. La mitad de estos estudios ofrecían resultados positivos, mientras que la otra mitad no. Curiosamente, todos los estudios que ofrecían resultados positivos procedían del Reino Unido, mientras que los cinco estudios Norteamericanos ofrecían resultados negativos (MEDINA ARIZA Juanjo, PÁG. 27)

1.12.- SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DERECHO COMPARADO

1.12.1.- En Chile

En la República de Chile la seguridad ciudadana contiene lo que se denomina el sistema Global de Seguridad Ciudadana en la cual se establecen los programas como creación de la Fiscalía Anti delincuencia, el plan operativo Policial Municipal, la habilitación de la oficina de la dirección de seguridad Vecinal, seminarios y capacitación y contiene una innovación con la denominación de vecinos vigilantes, a través de conocimientos de medidas de prevención, porque la seguridad de su territorio la entienden como el trabajo en conjunto de la comunidad, Autoridades policiales y medios Municipales.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

En su Artículo 19, establece que la Constitución asegura a todas las personas:

1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

6º La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

7º El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

- Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas.

El Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la república, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas (Constitución Política de Chile).

Chile para lograr sus objetivos planteados en su Plan de seguridad Pública "*Chile Seguro*" 2010-2014, requiere de un despliegue efectivo de una serie de acciones que han sido agrupadas en cinco áreas de intervención o ejes temáticos: Prevenir, Proteger, Sancionar, Apoyar y Rehabilitar. Estas cinco áreas se sostienen, a su vez, en dos ejes transversales relacionados con la gestión de la información y con la ejecución a nivel territorial. En dichos ejes se insertan, respectivamente, la creación de un Centro Estratégico de Análisis del Delito y la implementación del programa de intervención de barrios críticos, Barrio en Paz.

Las cinco áreas de intervención y los dos ejes transversales que sustentan el Plan han sido plasmados en un modelo estratégico, cuyo propósito

es enfocar los esfuerzos en los factores y delitos que más impactan o más daño causan a la población, en todas las fases del ciclo delictivo: desde conductas antisociales y delitos recurrentes, hasta crímenes violentos y crimen organizado.(Plan de seguridad Pública “Chile Seguro” 2010-2014: Pág. 21-23)

Para carabineros de Chile la categoría de “Seguridad Ciudadana”, se encuentra inmerso dentro del concepto y la función de seguridad pública constituye “una particular condición social caracterizada por la certidumbre que cada personal siente a cerca del respeto a sus derechos, de tal modo que se genera un sentir de tranquilidad individual y colectivo, a la vez que colabora eficazmente al desarrollo armónico de la sociedad. Ello de acuerdo a la visión de carabineros sobre seguridad pública en Chile, expuesta durante el segundo curso internacional para el diseño de políticas y evaluación de proyectos de Seguridad Ciudadana. (Santiago de Chile 2000)

Aparte con la vinculación de seguridad pública, la seguridad ciudadana comparte en la doctrina chilena, los principios bajo los cuales los estados democráticos deben ejercer la seguridad interior, pero su diferencia específica deriva de los agentes involucrados, particularmente en este caso las personas o habitantes que ejercen derechos y tienen deberes ciudadanos (PUENTE LAFOY, patricio y TORRES ROJAS, Emilio, Proyecto FONDECYT “Gestión de la Seguridad Ciudadana Local”)

La seguridad interna o pública, en tanto se refiere a la necesidad de mantener el orden público y el imperio de las leyes en el territorio de un Estado-Nación y su cumplimiento a sido habitualmente encargado a las fuerzas policiales en la mayor parte de las democracias modernas. (Kincaid, D; Gamarra, E.; (1996).

1.12.2.- En Brasil

En la Constitución del Brasil, se establece que la seguridad pública, es deber del Estado, derecho y responsabilidad de todos; y se ejerce para garantizar el orden público y la integridad de las personas y patrimonios, a través de los siguientes órganos:

1. **La policía ferroviaria federal;** órgano permanente, estructurado como una carrera, está destinada, en la forma de la ley, al patrullaje ostensible de las ferrovías federales.
2. **Los policías civiles,** dirigidos por delegados de policía de carrera, incumbe, reservada la competencia de la Unión, las funciones de policía judicial y la averiguación de las infracciones penales, excepto las militares.
3. **Es competencia de los policías militares,** la actividad de policía ostensible y la garantía del orden público; de los cuerpos de bomberos, además de las atribuciones definidas en la ley, es competencia la ejecución de actividades de defensa civil.
4. **Los policías militares y los cuerpos de bomberos militares,** las fuerzas auxiliares y la reserva del Ejército, están subordinados, juntamente con los policías civiles, a los Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios.

La ley regulará la organización y funcionamiento de los órganos responsables de la seguridad pública, de forma que se garantice la eficiencia de sus actividades.

Los Municipios podrán establecer guardias municipales, destinadas a la protección conforme a lo dispuesto en la ley.

1.12.3.- En Colombia

Se halla bastante ligada a la idea de paz. De ahí, que dentro de los fines esenciales del Estado se consagre el de “asegurar la convivencia pacífica” y como fin primordial de la Policía Nacional en su propósito de “asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz”.

La connotación de “ciudadana”, que podría darle amplia visión dentro de la perspectiva de los derechos fundamentales se encuentra restringida a la valoración relacionada con factores de grave perturbación del orden público que permitan declarar el estado de conmoción interior.

En su Artículo 44, Establece que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

En su artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

Son atribuciones del Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa Art 189 establece.

- Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
- Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

Así mismo en el Artículo 216 establece, la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Así mismo en su Artículo 315, establece entre las atribuciones del alcalde:

En el numeral 2, Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

De esta manera, y en coherencia conceptual con los artículos constitucionales, podemos presentar la siguiente aproximación a la seguridad ciudadana en Colombia:

La Seguridad Ciudadana se concibe como un Derecho Fundamental de las personas y una finalidad primordial del Estado Social de Derecho, que en su condición de bien público, propicia las condiciones necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico con sujeción a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado colombiano.(Constitución Colombiana)

Está establecido constitucionalmente que la fuerza pública en Colombia está integrada en forma exclusiva, por las fuerza Militares y Policía Nacional, frente al tema de seguridad podemos afirmar que, mientras las fuerzas Militares, están orientados a la preservación del orden público **la Policía Nacional tiene como objetivo especial mantener, promover y consolidar la convivencia ciudadana.**

Para Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
(Constitución colombiana)

Así mismo como resultado del proceso de Política Nacional de Seguridad Ciudadana se estructuraron de acuerdo a los siguientes componentes:

- 1) Desafíos;
- 2) Objetivos, principios rectores y criterios de intervención;
- 3) Ejes estratégicos centrales y sus respectivas líneas de acción;
- 4) Ejes transversales de la política, y

5) Estrategia de implementación, que estará acompañada de un esquema de asociación para su gestión y ejecución territorial entre entidades de los niveles nacional, departamental y municipal, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas.

Para la PNSC, se entiende por seguridad ciudadana *la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad.*

El mismo que se propuso como objetivo general, proteger a los nacionales y extranjeros que se encuentren en Colombia, en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y la sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia:

Objetivos específicos y ejes estratégicos de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y convivencia ciudadana

A fin de conducir la Política Nacional de Seguridad Ciudadana en un marco de legalidad se plantearon los siguientes principios rectores:

1. Salvaguarda de las libertades y derechos individuales
2. Articulación dentro del Estado.
3. Coordinación Nación–Territorio
4. Autonomía Territorial
5. Corresponsabilidad.

Criterios de intervención

1. Visión de largo plazo
2. Integralidad focalizada
3. Factores determinantes
4. Especificidad territorial
5. Población en riesgo
6. Adolescentes y jóvenes, una prioridad.
7. Priorización de delitos
8. Aprendizaje de experiencias exitosas
9. Incentivos adecuados.
10. Monitoreo, seguimiento y evaluación.

Así mismo es importante destacar de Colombia el primer eje estratégico, prevención social y situacional, en el cual como línea de acción para la prevención social establece:

- Capacitar a padres en situación de vulnerabilidad en prácticas de buena crianza y promover un acompañamiento, orientación y apoyo

desde la etapa prenatal y durante los primeros años del niño, para prevenir la violencia intrafamiliar y el abuso sexual.

- Capacitar a padres de familia en situación de vulnerabilidad en competencias básicas sobre resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales para prevenir actos de violencia e intolerancia social, en las familias y la comunidad.
- Capacitar a los estudiantes y a padres, directivos y docentes de establecimientos educativos en zonas vulnerables, en competencias para la resolución de diferencias interpersonales, con el propósito de mejorar la autoestima y el interés común por el aprendizaje
- Promover iniciativas que eviten la desescolarización, en particular de niños y jóvenes vulnerables, procurando en los casos de deserción que regresen al sistema educativo, y generando una oferta de educación multigradual y multimodal para la recuperación escolar.
- Promover jornadas escolares extendidas o complementarias con actividades extracurriculares o de refuerzo académico, y el uso de escenarios recreativos y deportivos escolares los fines de semana, para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Promover en los planes de desarrollo territorial programas locales de rehabilitación e inclusión social de la población habitante de la calle, acompañando procesos de renovación urbana que reduzcan la percepción de inseguridad y la comisión de delitos.

- Promover la identificación y el desarrollo de talentos, habilidades y competencias artísticas, musicales y culturales, el estímulo del hábito de la lectura y el uso y la apropiación de bibliotecas y demás espacios y alternativas culturales en zonas vulnerables.
- Impulsar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en centros educativos y culturales y en telecentros comunitarios, para estimular alternativas laborales, educativas y de uso del tiempo libre en zonas vulnerables.
- Promover la capacitación sobre los riesgos y el daño asociados al consumo de sustancias psicoactivas y el uso inadecuado del alcohol, orientada a la población en general y en especial a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluido su núcleo familiar o próximo.
- Promover restricciones al expendio e ingesta de alcohol y aplicar sanciones ejemplarizantes a quien conduzca en estado de embriaguez, dado el riesgo que implica para la sociedad, con un agravante en la sanción si además es portador de armas.
- Impulsar la capacitación de jóvenes en alto riesgo, incluidos quienes por razones exógenas están desescolarizados, en artes, oficios, competencias laborales y mecanismos de autogeneración de ingresos, además de impulsar su inserción socioeconómica.
- Promover acciones complementarias a las anteriores y específicas para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por redes de delincuencia común y crimen organizado,

en los centros urbanos priorizados (Política Nacional de Seguridad Ciudadana y convivencia ciudadana 2010-2014 Colombia; págs. 15-16).

1.12.4.- Bolivia

En su constitución política Boliviana Artículo 8°, establece que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

En su artículo 299, establece que se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
2. Gestión del sistema de salud y educación.
3. Ciencia, tecnología e investigación.
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
5. Servicio metereológico.

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos
10. Proyectos de riego.
11. Protección de cuencas.
12. Administración de puertos fluviales
13. Seguridad ciudadana.
14. Sistema de control gubernamental.
15. Vivienda y vivienda social.
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca (Constitución Política del Estado de Bolivia; artículo 8 y 229).

El Plan Nacional de seguridad ciudadana “para una vida segura” 2012-2016, tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el vivir bien a través del *Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”*, en coordinación con los diferentes niveles de Estado.

En su artículo 3°, establece como (Prioridad nacional) la seguridad ciudadana y bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. Declarando prioridad nacional el financiamiento y la

ejecución de los Planes de Seguridad Ciudadana Nacional, Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino.

Artículo 11°, establece que son responsabilidades de las entidades territoriales autónomas municipales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes:

1. Formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, los planes, programas y proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2. Las entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario campesinas, son las responsables del pago de los servicios básicos de todas las Estaciones Policiales Integrales y Módulos Policiales, ubicados en el ámbito territorial del municipio o autonomía indígena originaria campesina, que presten el servicio de prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana.
3. Formular y ejecutar en el ámbito territorial municipal, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales e indígena originario campesinas, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. y al observatorio nacional y local de seguridad ciudadana, Artículo 30, Artículos, con convenios inter gubernativos, capacitación

ciudadana, infraestructura policial, conservación y mantenimiento de muebles, tecnología publica preventiva, combustibles y lubricantes, proyectos educativo, programa de rehabilitación y reinserción social, patrullaje y seguridad ciudadana y reinserción laboral productiva.

1.12.5.- En España:

La constitución política en su artículo 97º, establece que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la constitución y las leyes; así mismo en su artículo 4º, establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

En virtud a ello se establece la Ley 1/1992 el 21 Febrero de 1992, sobre la protección de seguridad ciudadana, también conocida como la ley Concuera, por haber sido aprobado por José Luis Concuera Cuesta como titular del Ministerio del Interior, posteriormente se aprueba el anteproyecto de ley orgánica de protección de Seguridad ciudadana en el cual se establece como objeto la seguridad ciudadana es una condición esencial para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo; así mismo es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes, la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.

Las entidades locales ejercerán las atribuciones que les confiere la ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la legislación estatal de régimen local y las leyes autonómicas.

En su artículo 3 se establece como fines:

- a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
- b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
- c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
- d) El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades.
- e) La protección de las personas y bienes.
- f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público.
- g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios esenciales para la comunidad.
- h) La erradicación de cualquier forma de violencia.
- i) La prevención de la comisión de delitos y faltas y de infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificados en esta ley.

Las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirán por los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad, eficacia,

eficiencia, responsabilidad y control jurisdiccional (PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo, *“Ante proyecto de Ley de represión ciudadana”*

<http://www.juecesdemocracia.es/pdf/INFOLEYSEGciUDADANA.pdf>; España, pág. 38).

Artículo 5. Autoridades y órganos competentes.

1. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en materia de seguridad ciudadana.
2. Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del Estado:
 - a) El Ministro del Interior.
 - b) El Secretario de Estado de seguridad.
 - c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
 - d) Los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 - e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los directores Insulares.

Así mismo el Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años, Corresponde al Ministerio del Interior la dirección,

organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad

En el caso de que exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta; Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaborarán mutuamente en los términos previstos en su ley orgánica reguladora, Igualmente las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En cuanto al régimen sancionador, la responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, es el Ministerio de interior el encargado de imponer sanciones tipificadas en esta Ley, los mismos que se clasifican en leves, graves y muy graves

1.12.6.- En Ecuador

En la república Ecuatoriana, se le asigna a la policía nacional, la misión fundamental de garantizar y velar por el orden interno, así como la seguridad individual y social, es de destacar que la policía nacional constituye por mandato constitucional una fuerza auxiliar de las fuerzas armadas y juntas constituyen la fuerza pública(Constitución Política de la República de Ecuador, Art 136)

Por cuestiones de seguridad según se desprende de su artículo 15, las personas jurídicas extranjeras no pueden adquirir, con la finalidad de explotación económica, bajo ninguna modalidad o tipo propiedades ni

concesiones en zonas de seguridad nacional, la libertad de culto también tiene como límite la seguridad de las personas.

Es de resaltar que consideran el tema de la Bioseguridad, en el tema del medio ambiente Art. 270; además de señalar como deberes de los ciudadanos “colaborar en el mantenimiento de la paz y seguridad” de acuerdo a su artículo 97.

Art 171, el presidente tiene dentro de sus funciones, mantener el orden interno y la seguridad pública, así como decretar el estado de emergencia “por grave conmoción interna”

Según su artículo 218, el sistema penal y el internamiento buscan como finalidad la educación y capacitación para el trabajo a fin de obtener la rehabilitación del sentenciado, permitiéndole una adecuada reincorporación social.

Así mismo sobre nuestro vecino país del norte, no encontramos mayor desarrollo legislativo sobre el tema de seguridad ciudadana; no obstante a nivel de cada una de sus 22 provincias se suelen implantar planes locales de seguridad ciudadana. Diferencia importante lo que ocurre en el Perú, es que el Ecuador se divide en provincias que a su vez se subdividen en cantones y estos a su vez en parroquias, sean urbanas o rurales, cada provincia es administrada por un gobernador, representante del ejecutivo y que es nombrado por el presidente de la república; y por un prefecto provincial integrado con voto dirimente en el consejo provincial (ambos elegidos por sufragio universal). Cada cantón constituye un municipio están a cargo del Consejo Municipal, los consejos de las capitales de provincias están formados

por un consejo municipal y un alcalde que lo preside elegidos también por votación popular. Los consejos de los cantones que no son capitales de provincia, excepto aquellos que pasan de 5,000 habitantes, se rigen por un presidente. En cada parroquia el gobernador de la provincia nombra a un teniente político.

CAPITULO II

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley de Seguridad Ciudadana resulta insuficiente para poder combatirla delincuencia, pues somos testigos presenciales de actos delincuenciales en algunos casos y en otros muchos casos nos enteramos por los medios de comunicación social; y en cuanto al arresto ciudadano vigente con la finalidad de combatir la delincuencia no está dando los resultados que se esperaban porque quien pretende detener a algún delincuente corre el riesgo de perder la vida, porque es la delincuencia armada la que impera en la actualidad: El problema se presenta por que las personas tienen temor de enfrentarlos, e incluso muchas víctimas de asaltos han sido asesinados por el simple hecho de poner resistencia e incluso en varios casos cuando las víctimas piden auxilio casi nadie se atreve a defenderlos por el temor de poner en riesgo su vida no atreviéndose a capturar a los delincuentes en flagrancia, y es más muchos miembros de nuestra Policía Nacional de Perú han perdido la vida cuando se han enfrentado a delincuentes encontrados en flagrancia; por lo que siendo esto así cabe formularse la siguiente interrogante:

2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El arresto ciudadano contribuye a combatir la delincuencia, garantizando la Seguridad Ciudadana?

2.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación planteada se justifica porque es necesario analizar las razones por las cuales el arresto ciudadano no contribuye en nada a garantizar

la seguridad ciudadana, resultando inútil el esfuerzo del Estado por combatir la inseguridad ciudadana que involucra a todos los niveles de gobierno, y combatir la delincuencia generalizada en todo el país, justificándose la investigación porque en nuestra realidad el llamado arresto ciudadano no está dando los resultados esperados, deviniendo en consecuencia en una norma que con el tiempo caerá en el desuso, porque entre otros aspectos no le brinda garantía alguna a las personas que se atrevan a arrestar a algún delincuente encontrado en flagrancia; porque de lograr hacerlo pueden a posteriori ser víctimas de algún atentado en contra de su vida o la vida de algún familiar

2.4.- VIABILIDAD:

No obstante a los obstáculos que se presentan en el desarrollo de la investigación, tales como bibliografía especializada sobre el tema en la región así como los escasos recursos económicos; sin embargo superando dichas deficiencias si resulta viable la realización de la presente investigación

2.5.- OBJETIVOS

2.5.1.- Objetivo General

Determinar las causas por las cuales el arresto ciudadano no contribuye a combatir la delincuencia.

2.5.2.- Objetivos Específicos

- Analizar las razones por las cuales los ciudadanos no se atreven a capturar a delincuentes en flagrancia

- Analizar los alcances de arresto ciudadano en nuestra normatividad.

2.6.- HIPÓTESIS

El arresto ciudadano No contribuye a combatir la delincuencia, garantizando la Seguridad Ciudadana

2.7. VARIABLES:

2.7.1.- Variable Independiente

Arresto ciudadano

2.7.2.- Variable Dependiente

Inseguridad ciudadana

2.7.3.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:

VI: Arresto ciudadano: Es el derecho que tiene toda persona de poder acceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. En este caso se debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda en dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privado de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La policía redactará un acta donde se haga contar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

VD: Inseguridad ciudadana; es una situación social, donde predomina la sensación de desconfianza, por la presencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, viviendo a sobresaltos y en zozobra por el temor de sufrir algún daño.

2.7.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

2.7.4.1.- Indicadores

VARIABLE INDEPENDIENTE	INDICADOR	FUENTE
Arresto ciudadano	Temor a enfrentar a delincuentes	- Legislación - Doctrina - jurisprudencia -Encuestas
VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADOR	FUENTE
Inseguridad ciudadana	Temor en que vive la población	-Legislación -Doctrina - Jurisprudencia -Encuestas

2.8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

2.8.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de carácter descriptivo, correlacional y documental.

2.8.2.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

2.8. 2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La técnica a emplearse será aquella que privilegie los documentos, llevándose a cabo una recopilación de los mismos, es decir la técnica bibliográfica, así como la técnica de la encuesta

2.8. 2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

MÉTODO DOGMÁTICO: En un comienzo se utiliza el método dogmático con la finalidad de poder conocer la naturaleza jurídica, del arresto domiciliario y la seguridad ciudadana

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICO: Con la finalidad de reforzar la interpretación del derecho

MÉTODO DEDUCTIVO: Es decir de lo general a lo específico; partiendo de enunciado general del que se va desentrañando partes o elementos específicos. Inductivo: Es aquella orientación que va de los casos particulares a lo general, es decir que, de datos o elementos individuales por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende a esos casos particulares.

MÉTODO EXPLICATIVO: Con la finalidad de considerar la respuesta al ¿cómo, se centra en responder a la pregunta: ¿Por qué es así la realidad? O ¿cuáles son las causas y Efectos.

MÉTODO SOCIOLÓGICO - FUNCIONAL, Por el contexto donde comienza a funcionar la maquinaria del derecho a través de sus conceptos jurídicos e instituciones.

MÉTODO LITERAL: Con la finalidad de llegar a conocer el significado de las normas Método de la ratio legis a fin de comprender para qué se dictó determinada norma, es decir, conocer el espíritu de la ley.

MÉTODO EMPÍRICO: A través de una encuesta con la finalidad de medir el pensamiento de los encuestados sobre el tema materia de investigación.

CAPÍTULO III

PROBANZA DE HIPÓTESIS

3.1.- PROBANZA JURÍDICO DOCTRINAL

Teniendo en consideración nuestra hipótesis queEl arresto ciudadano No contribuye a combatir la delincuencia, no garantizando en consecuencia la Seguridad Ciudadana, se hace necesario recurrir a la norma que decreta el llamado arresto ciudadano, ley Número 29372 que modifica el artículo 260 del Código Procesal Penal, que prescribe que: “Toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. Debiendo de entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactara un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención”.

Haciendo un análisis de esta disposición se puede afirmar con las precisiones que se acotan, que corroboran la probanza de nuestra hipótesis:

a).- En la actualidad por lo general los delincuentes realizan sus actos delictivos con armas punzocortantes o con armas de fuego; por lo que en tales circunstancias si alguna persona intenta proceder a su detención, siente temor el poder hacerlo, por los riesgos que correría de sufrir alguna lesión e inclusive el riesgo de poder perder su vida.

b) En el supuesto caso que una persona logre el arresto de un delincuente en flagrancia, tendría la dificultad de poder conducirlo de inmediato al Puesto Policial más cercano conforme lo indica la norma procesal, sin correr riesgo alguno en el trayecto, salvo el caso que cuente con el apoyo de otras personas que contribuyan al arresto.

c) En los casos en que efectivamente se logre la captura y arresto de un delincuente en flagrancia y el delincuente agrede o quita la vida a quien lo arrestó, que seguridad y garantías le brinda el Estado a ésta persona o a su familia en los casos que pierda la vida.

d) El Estado no brinda garantía ni seguridad alguna a las personas que cumpliendo con la norma se proponen y lograr arrestar a delincuentes encontrados en flagrancia.

3.2.-. ANÁLISIS DOGMATICO

Con la finalidad de corroborar la probanza de nuestra hipótesis se hace un análisis de normas constitucionales y legales; así podemos citar las siguientes:

3.2.1.- Constitución Política del Perú 1993.

El término seguridad ciudadana, como bien jurídicamente protegido en nuestro ordenamiento jurídico, fue recogido a nivel constitucional en el artículo 195º, cuyo texto original prescribía: “La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana”

Es a consecuencia de dicha norma constitucional que recién se considera dentro de nuestro ordenamiento jurídico el término “Seguridad

Ciudadana”. Posteriormente, la reforma constitucional del 2002 (Ley N° 27680 del 07 de marzo de 2002), modifica el Capítulo referido a la descentralización, por lo que los departamentos se convierten en Regiones y el artículo 197° es reemplazado por el artículo 195° que introduce el siguiente texto: *“Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”*. Es decir, con esta modificación constitucional podemos observar que se incluye la participación vecinal en el desarrollo local, así como el liderazgo de las municipalidades en la seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional

En virtud de esta disposición constitucional, la seguridad ciudadana es incorporada dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, pues en su artículo 85° establece como función específica exclusiva de las Municipalidades Provinciales:

“Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la PNP, y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, Vigilancia Ciudadana, rondas urbanas, campesinas, o similares de nivel distrital o de los centros poblados de la Jurisdicción provincial, de acuerdo a Ley.

Y como función específica exclusivas de las municipalidades distritales Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia Municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas de la Municipalidad Provincial de acuerdo a Ley

De otro lado el artículo 145° de la referida norma establece que “Para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará con

las organizaciones sociales, vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas.” Como se puede observar, la concepción de seguridad ciudadana, ya no sólo involucra a las Municipalidades y a la Policía Nacional, sino también comprende y obliga a participar en ella a la sociedad civil y a las principales organizaciones sociales. (Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art 85 y 145).

El concepto de “ciudadana”, con el cual se precisa la concepción de seguridad, hunde sus raíces en las fuentes ideológicas que acompañaron la Revolución Francesa, al llamar “ciudadanos” a las personas, en el propósito de denominarse entre ellas, superando el término de súbdito, y fundamentalmente enfatizando en su calidad de personas, con derechos inalienables reconocidos por Ley.

Existen Declaraciones Internacionales que reconocen que todo ser humano o individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También notables pensadores de reconocimiento internacional, de la talla de Adela Cortina, Martha C. Nussbaum, Amartya Sen, Martín Urquijo, han abordado el análisis del concepto, que por su profundidad y relevancia académica no encuentra espacio en este ensayo, salvo resaltar la tesis de “la ciudadanía desde las capacidades” que privilegia en su enfoque, para su realización, más que la visión del contrato social como fundamento, el del punto de partida desde los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. La mención de “seguridad ciudadana” en un texto constitucional de relevancia internacional, se encuentra de manera expresa en el artículo 104 de la Constitución Española de 1978, como finalidad de garantizar, atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno. El término de

seguridad ciudadana reemplazaba al de orden público, de ingrata recordación para muchos españoles en el inicio de su nueva vida democrática. Más tarde, la OEA, en la Declaración de Montruis, en 1995, menciona de nuevo el concepto, al ratificar la voluntad de propiciar el intercambio de experiencias para efecto de mejorar las condiciones de seguridad ciudadana a nivel de su área de influencia.

La seguridad ciudadana, aparece entonces, como concepto emergente en la década de los ochenta, y con mayor énfasis en los noventa. Por lo general, la expresión es entendida como referencia a varios aspectos inherentes a la vida social organizada y se utiliza, la mayoría de las veces “en relación con el tema de la criminalidad”. Pero –democráticamente hablando– todo no ha sido un camino de rosas en su evolución nominal, si tenemos en cuenta que ese término de “seguridad ciudadana” fue utilizado por las fuerzas armadas del Cono Sur, a finales de los años setenta como sinónimo de seguridad nacional dentro de la política internacional impartida por EEUU desde la Escuela de las Américas. Afortunadamente ya nadie recuerda aquellas deplorables menciones (GONZALES PACHECO Camilo: 2010, págs. 41-45)

El surgimiento, desarrollo y consolidación conceptual de la seguridad ciudadana, puede considerarse de conformidad con las siguientes etapas:

A) Acorde con los posteriores enunciados de la Seguridad Humana, surge como oposición a una visión de seguridad nacional y pública que pone como eje central u objeto de ella la seguridad del Estado. En esta nueva concepción, más que la protección del territorio y de la soberanía del Estado, el centro lo constituye la protección del ser Humano.

B) Propende por una seguridad sustentada en el desarrollo humano más que en el imperio de las armas.

C. La noción de Seguridad Ciudadana se consolida como un concepto inexorablemente ligado a la seguridad del individuo, los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y la convivencia social.

D. Dentro de esta dinámica, se pretende reformar las instituciones y políticas de seguridad pública, en términos tales que la Seguridad Ciudadana se entienda como la seguridad de todas las personas.

E. Se propician acuerdos entre gobiernos y Estados, orientados a considerar la Seguridad Ciudadana como un fenómeno dinámico y global que exige intervenir decididamente (Constitución Española 1978. “*Artículo 104. 1*) Dicha disposición prescribe: *Las fuerzas y cuerpo de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana*”

El estado peruano en su proceso de desarrollo y consolidación se mantiene alerta y preparado a fin de hacer frente a las amenazas contra la nación y el estado, buscando así garantizar su seguridad, teniendo como fundamentos

- La participación de la sociedad peruana en la solución de los conflictos internos y externos, a través de la presentación de la situación en forma veraz y oportuna, a fin que las personas y organizaciones de la sociedad civil se identifiquen con la acción del Estado y se sumen al esfuerzo para resolver los conflictos.

- La población debe comprender que la seguridad y defensa son bienes y servicios públicos comunes destinados a resguardar la existencia de la

Nación y se identificará con estos principios, a través de su difusión y de la elevación de su nivel de conocimientos sobre estos temas, así como de su relación con los valores de la democracia y del respeto a los derechos humanos.

Para la obtención y mantenimiento de la seguridad nacional se ha elaborado un conjunto de lineamientos generales para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos de los campos de acción del Estado: defensa y desarrollo, para hacer frente a los obstáculos, riesgos, amenazas o desafíos contra la seguridad y los intereses del Estado, para ello se identificaron objetivos internos nacionales y combatir la inseguridad del país, como es la delincuencia común organizada, tráfico ilícito de drogas (micro comercialización de drogas), corrupción, depredación del medio ambiente.

El esfuerzo por interpretar los intereses y aspiraciones de la Nación se dio en el Acuerdo Nacional del mes de Julio del 2002 definiendo los siguientes objetivos:

1. Democracia y estado de derecho; Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada.

2. Equidad y Justicia Social; El desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los peruanos, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del Estado.

3. Competitividad de País; Para lograr el desarrollo humano y solidario del país, el Estado adoptará una política económica sustentada en los

principios de la economía social de mercado, reafirmando su rol promotor, regulador, solidario y subsidiario en la actividad empresarial.

4. Estado eficiente, transparente y descentralizado; Consolidar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de las personas como sujetos de derechos y obligaciones (TOLEDO MANRIQUE, Alejandro, Acuerdo Nacional 2002).

A partir de estos objetivos se diseñaron 31 políticas de Estado, la novena corresponde a la de Seguridad Nacional y establece:

“Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que esta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes. En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general”

Con este objeto, el Estado: Fomentará la participación activa de la sociedad, en el logro de objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. Garantizará la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz. Así mismo dentro de las 31 políticas se identificaron algunas políticas que tienen relación con la seguridad nacional (TOLEDO MANRIQUE Alejandro, CHIABRA LEÓN Roberto: 2004, págs. 61-63)

3.2.2.- Análisis de la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana

La Ley 27933 en su artículo 2º define a la Seguridad Ciudadana como *“la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.”*

A partir de la promulgación de esta ley, el Estado cuenta no sólo con una definición expresa de lo que es seguridad ciudadana, sino que además se crea un sistema que tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, liderado por las principales autoridades regionales y locales, conforme al mandato contenido en nuestro ordenamiento constitucional.

Creación y Finalidad del Sistema

Tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social.

Componentes del Sistema

Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las siguientes:

- a. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaria Técnica.
- b. Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.
- c. Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.
- d. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)

Es el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana; con autonomía funcional y técnica. Depende de la Presidencia de la República y es presidido por el Ministro del Interior.

Los Miembros del Consejo está integrado por:

- El Ministro del Interior, quién lo presidirá.
- El Ministro de Justicia o su representante.
- El Ministro de Educación o su representante.
- El Ministro de Salud o su representante.
- El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
- Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
- El Fiscal de la Nación o su representante.
- El Defensor del Pueblo o su representante.
- Dos Presidentes Regionales o sus representantes.
- El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante.
- Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor número de lectores o sus representantes.
- Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por Resolución Suprema firmada por el titular del respectivo sector, y

los demás representantes será designados por el titular de la entidad correspondiente.

Facultades Especiales; El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está facultado para invitar a sus sesiones a representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, de acuerdo a la temática específica a tratar.

3.2.3.- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

En el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es necesario precisar que el reglamento adiciona el tema de los principios que guiaran la organización y funcionamiento del sistema, que no habían sido desarrollados por la Ley, tema tales como.

- **Legalidad.-** Sus actividades se realizarán en el marco de la Constitución Política del Perú, las leyes de la República, con absoluto respeto a los derechos humanos.

- **Coordinación e integración.-** Para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del Sector Público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes e integradas.

- **Supervisión y control ciudadano.-** Para desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.

- **Transparencia funcional.**- Para mantener una total transparencia en las actividades del Sistema, evitando injerencias político-partidarias o de otra índole.

- **Participación Ciudadana.**- Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.

- **Prevención.**- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.

- **Solidaridad.**- Las instancias y organismos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines y objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda mutua.(SAAVEDRA VIDANGOS Kelsen, UNP; Tesis Prospectiva y aproximación Crítica al tratamiento de Seguridad Ciudadana en el distrito de Piura)

3.3.- ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

Con la finalidad de corroborar la probanza de nuestra hipótesis y en consecuencia demostrar que: El arresto ciudadano no contribuye a combatir la delincuencia, no garantizando en consecuencia la Seguridad Ciudadana, no logrando la disminución de la delincuencia en el país; se ha realizado una encuesta entre litigantes y abogados, habiéndose entrevistado a un total de 40 personas; siendo el resultado de dicha encuesta el siguiente:

Ante la pregunta si ¿conocen en que consiste el arresto ciudadano? las respuestas que se obtuvieron fueron.

Treinta y siete de los entrevistados respondieron que Sí conocen

Dos de los entrevistados respondieron que No conocen

Uno de los entrevistados no precisa

Ante la pregunta si ¿se atreverían a detener a un delincuente que se encuentre en flagrancia? las respuestas que se obtuvieron fueron.

Treinta y ocho de los entrevistados respondieron que NO se atreverían

Dos de los entrevistados respondieron que SI se atreverían

Ante la repregunta del porque no se atreverían, a los que habían contestado que No; las respuestas obtenidas fueron:

Veintidós (22) de los entrevistados respondieron que, no se atreverían pues corren el riesgo de sufrir alguna lesión e incluso hasta pueden perder la vida, porque los delincuentes siempre portan armas.

Doce (12) de los entrevistados respondieron que no se atreverían, porque corren el riesgo que los delincuentes se venguen contra ellos o su familia.

Cuatro (04) de los entrevistados respondieron que, es porque los delincuentes salen inmediatamente en libertad porque la justicia más protege al delincuente que a la víctima

Ante la repregunta del porque se atrevería, a los que habían contestado que sí, las respuestas obtenidas fueron

Dos de los entrevistados respondieron que lo harían porque considera que hay que contribuir con la Policía para que disminuya la delincuencia, sin importarle

las consecuencias de lo que les pueda suceder en el momento del arresto o posteriormente.

Ante la repregunta SI ¿el Estado brinda alguna recompensa a las personas que arrestan delincuentes en flagrancia? las respuestas obtenidas fueron

Los cuarenta (40) entrevistados respondieron que el Estado no recompensa en modo alguno a los ciudadanos que arresten delincuentes.

Ante la repregunta SI ¿el arresto ciudadano contribuya la disminución de la delincuencia en el país? las respuestas obtenidas fueron

Los cuarenta (40) entrevistaos respondieron que no contribuye en nada porque la delincuencia sigue creciendo día a día y en su mayoría los asaltos son con armas de fuego.

Ante la repregunta SI ¿el arresto ciudadano está contribuyendo a brindar seguridad a la población? las respuestas obtenidas fueron

Los cuarenta (40) entrevistados respondieron que no contribuye en nada porque el Estado no brinda protección alguna a quienes se atreven a arrestar delincuentes en flagrancia, existiendo más bien una inseguridad alarmante en la población que tiene que vivir en zozobra ante la ola delincencial.

Ante la repregunta ¿Si un ciudadano es agredido por el delincuente, quien es el que sufraga los gastos de su recuperación? las respuestas obtenidas fueron

Los cuarenta (40) entrevistados respondieron que es el mismo ciudadano agredido el que tiene que sufragar los gastos de su curación.

Ante la repregunta SI ¿los herederos de quien es asesinado por el delincuente que intentó arrestar son indemnizados por el Estado?

Los cuarenta entrevistados respondieron que el Estado no otorga indemnización alguna a los herederos del fallecido.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Siempre existe temor en los ciudadanos de atreverse a arrestar a los delincuentes cuando observan la comisión de algún ilícito penal (flagrancia) pues corren el riesgo de ser agredidos porque los delincuentes siempre portan armas punzocortantes o armas de fuego, haciendo uso de ellas con suma facilidad.

SEGUNDA: Las personas que se atreven a arrestar delincuentes en flagrancia, y son agredidas no reciben respaldo alguno por parte del Estado.

TERCERA: Si una persona por pretender arrestar a algún delincuente pierde la vida, su familia queda en la orfandad porque el Estado no se responsabiliza por lo que le pueda suceder.

CUARTA: El arresto ciudadano no contribuye en nada con el Sistema de Seguridad Ciudadana que entre una de sus funciones persigue combatir la delincuencia.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda que el Estado indemnice al ciudadano que arreste a algún delincuente en flagrancia en la comisión de algún ilícito penal, y a consecuencia de ello sufra alguna agresión en su integridad física

SEGUNDA: Se recomienda que el Estado fije una pensión de viudez y una pensión de orfandad en favor de la viuda e hijos del ciudadano que haya perdido la vida a consecuencia de haber procedido al arresto de un delincuente en flagrancia en la comisión de un ilícito penal; y cuando el fallecido no tenga cónyuge e hijos menores, fije una indemnización en favor del sus herederos legales.

TERCERO: el estado debe practicar en su política de seguridad ciudadana, una función preventiva, pues el uso de las facultades punitivas y coercitivas no estan dando los resultados esperados en la lucha contra la delincuencia.

BIBLIOGRAFÍA

ARRIAGADA, Irma y Lorena GODOY (1999) Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y política en los años noventa. En: CEPAL, *Serie de Políticas Sociales*.

AZUELA GUITRON, Mariano (2005). *“Las garantías de seguridad Jurídica colección garantías individuales Número 2”* Segunda edición Editorial Corte Suprema de Justicia de la Nación de México.

BAZÁN SEMINARIO, César; MEJÍA HUISA, Nancy; y LEVAGGI TAPIA Jorge (2013) Seguridad Ciudadana Informe Anual 2013, crisis política temores y acciones de esperanza.

BERCALLI Roberto, BUSTOS RAMIREZ Juan y MIRALLES (1983), Teresa “El pensamiento criminológico” Volumen I Edición Bogotá, Editorial TEMIS

BERNALES BALLESTEROS, (1999) Enrique.”La constitución de 1993. Análisis Comparado”. Quinta edición. Lima. Editorial Constitución y sociedad. ICS.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio (1979) “Derecho Constitucional Mexicano” Tercera edición México. Editorial Porrúa

BURGOA, Ignacio (2002) “Las Garantías Individuales” trigésima cuarta edición. México. Editorial Porrúa.

BUSTOS RAMIREZ, Juan (2004) *“Obras Completas”*. Tomo I “Derecho Penal parte General” Lima, Editorial ARA Editores E.I.R.L.

CCAROCA PÉREZ, Alex. (2005) *“Manual el Nuevo Sistema Procesal Penal”*. Tercera Edición Santiago de Chile. Editorial LexisNexis.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (2007). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires-Argentina. Editorial Heliasta

CASTILLO ALVA, José Luis y otros. (2004) “Código Penal Comentado” Tomo I “Título Preliminar parte general” Lima. Editorial Gaceta Jurídica.

CÓDIGO PENAL. (2013) Lima. Editorial Jurista Editores.

DAYENOFF, David Elbio, (1998) *“El Juicio Oral en el fuero penal. La Querella”*. Los recursos: casación. Apelación, queja, reposición, revisión y constitucionalidad” Buenos Aires. Editorial Depalma.

DIEZ Manuel María. “Derecho Administrativo”. Tomo I. Buenos Aires. Editorial Bibliográfica Omega.

FRANCO ALZAMORA, Carlos. Sub Oficial Técnico de Segunda. Consideraciones de carácter legal sobre la detención policial En: Revista de la Policía Nacional del Perú

FRERRAJOLI, Luigi (1995) "Derecho y razón. Teoría de Garantismo Penal".Madrid. Editorial Trotta..

GARCÍA BELAUNDE, Domingo. (2004) Revista Peruana de Derecho Público.

GONZALES PACHECO Camilo (2010) Seguridad Ciudadana un derecho fundamental. Bogotá-Colombia.

GUTIÉRREZ, Walter. (2005) "La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. Obra colectiva escrita por 117 Juristas del País" Tomo I lima. Editorial Gaceta Jurídica

JELLINEK, Georg (2001). "*Derecho Constitucional General*" Quinta edición, Lima. Fondo editorial de la Pontífice Universidad Católica del Perú.

LASTRA LASTRA, José Manuel. (1994) "Fundamentos de Derecho" México. Edición Mc Graw Hill.

MORAS MOM, Jorge R. (2004) "*Manual de Derecho Procesal Penal. Juicio Oral y Público Penal Nacional*" Sexta edición. Editorial LexisNexis. Abelardo Perrot.

MUÑOZ CONDE, Francisco. (1993) "*Derecho Penal parte General*". Valencia. Editorial Tirant lo Blanch.

MUÑOZ CONDE Francisco. (2001) "Introducción al derecho Penal". Segunda Edición. Buenos Aires Argentina Euros editores,

NÚÑEZ Ricardo C. (1999) "*Manual de Derecho Penal- Parte General*", cuarta edición actualizada Editorial Marcos Lerner Córdoba.

OMAR A SAR. (2006) Constitución Política del Perú con la Jurisprudencia artículo por artículo, del Tribunal Constitucional. Lima. Editorial nomos &thesis

OUVINA, Guillermo y otros (1998) "Teorías actuales del derecho Penal". Buenos Aires. Editorial Ad Hoc Buenos Aires.

PIQUET, Alejandro (2005) "Temas de Derecho Penal y Criminología". Buenos Aire. Editor Ediar.

PURRUA PÉREZ, Francisco (1999) "Teoría del Estado". 32ava Edición. México. Editorial Purrrúa .

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2001) "*Diccionario de la Lengua Española*" Tomo II Vigésima segunda Edición. Madrid. Editorial Espasa Calpe..

REYES VALDEZ, Félix María y otros (2007) "*Seguridad Social*" República Dominicana, Fondo editorial de la Escuela Nacional de Magistratura.

RUBIO CORREA, Marcial (1999) *“Estudios de la Constitución Política de 1993”* tomo V Lima. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SANTOS CALDERÓN, Juan Manuel. Estrategias de la Policía Nacional para la consolidación de la seguridad ciudadana.

SCHMITT, Carl. (1991) “El concepto de lo político” Madrid. Editorial Alianza Madrid 1991.

SERRA ROJAS, Andrés. (2000) “Derecho Administrativo. Primer curso” Vigésima octava Edición México. Editorial Porrúa.

TOLEDO MANRIQUE Alejandro, CHIABRA LEÓN Roberto: 2004, *“Libro Blanco de Defensa Nacional”*.

SAAVEDRA VIDANGOS Kelsen (2007), UNP; Tesis Prospectiva y aproximación Crítica al tratamiento de Seguridad Ciudadana en el distrito de Piura)

APÉNDICES

APÉNDICE 1-A

Ley 29372 Arresto CIUDADANO

Artículos 259 y 260 del Código Penal

Ley que modifica el artículo 259 y su entrada en vigencia, así como la del artículo 260 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente.

LEY N° 29372

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 259 Y SU ENTRADA EN VIGENCIA, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 957, REFERIDOS A LA DETENCIÓN POLICIAL Y ARRESTO CIUDADANO EN FLAGRANTE DELITO, RESPECTIVAMENTE

Artículo 1.- Modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957

Modifícase el artículo 259 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

“Artículo 259.- Detención policial

1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.
2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado

inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.”

Artículo 2.- Incorporación del inciso 6) a la primera disposición final del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957

Incorpórase el inciso 6) a la primera disposición final del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957 y modificado por la Ley N° 28671, Ley que Modifica la Entrada en Vigencia del Código Procesal Penal y Dicta Normas Complementarias para el Proceso de Implementación del Nuevo Código, en los siguientes términos:

“Primera.- Vigencia del Código Procesal Penal

(...)

6. Los artículos 259 y 260 entran en vigencia en todo el país el 1 de julio de 2009.”

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil nueve